

Informe de la Misión Internacional de Verificación sobre la situación de los
derechos humanos de la población migrante hondureña
y su derecho a la protección internacional

Septiembre 2015

Consejería en Proyectos-Project Counselling Service

MISIÓN INTERNACIONAL DE VERIFICACIÓN

MIEMBROS

Juan Luis Carbajal Tejeda

Amalia Dolores García

Leticia Gutiérrez Valderrama

Lisa Haugaard

Patricia Montes

Pilar Trujillo Uribe

Consejería en Proyectos desea reconocer de manera especial a la Hermana Lidia Mara Souza, Misionera Scalabriniana, Secretaria Ejecutiva de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Honduras, por su acompañamiento a la Misión Internacional de Verificación

Mayra Alarcón Alba, Representante de Consejería en Proyectos para Centroamérica y México

Pablo Cala, Coordinador del Programa de Desplazamientos y Migraciones Forzadas de la Oficina de Consejería en Proyectos para Colombia

Fanny Polanía Molina, Coordinadora del Programa de Desarraigo y Migración Forzada de la Oficina de Consejería en Proyectos para Centroamérica y México

Sergio Blanco Herrero, Punto Focal de la Misión Internacional de Verificación

Julia Silvestre Zavala, Oficial de Proyectos de la Oficina de Consejería en Proyectos para Centroamérica y México

Cristal Barrientos Gálvez, Administradora de la Oficina de Consejería en Proyectos para Centroamérica y México

Andrea Yos, Apoyo Logístico de la Oficina de Consejería en Proyectos para Centroamérica y México

ÍNDICE

Prólogo

Resumen Ejecutivo

Introducción

1. Participantes en la Misión Internacional
2. Alcance y objetivos del Informe
3. Recorrido de la Misión Internacional y sus reuniones
4. Metodología

CAPÍTULO I Causas del desplazamiento y la migración forzada en Honduras

1. Violaciones a los derechos humanos
 - a. La violencia e impunidad
 - b. Militarización
 - c. Violencia contra Defensores, Periodistas y Población Vulnerable
 - d. Migración de los niños, niñas y adolescentes
2. Situación socioeconómica
 - a. Modelo de desarrollo
 - b. La falta de empleo y oportunidades de trabajo
3. Medidas del Estado hondureño para enfrentar la situación legales e institucionales
 - a. Medidas institucionales y legales
 - b. El Plan de la Alianza para la Prosperidad
 - c. Obligatoriedad de la aplicación del Derecho internacional

CAPÍTULO II La necesidad de protección internacional en la ruta migratoria

1. El tránsito
 - a. Violaciones a los derechos humanos y crímenes contra migrantes
 - b. El Programa Frontera Sur
 - c. Responsabilidades en la comisión de violaciones, abusos de autoridad y crímenes
 - d. Acceso a la protección internacional en el tránsito
2. El destino
 - a. La solicitud de asilo en el destino: situación de detenciones y deportaciones
3. El retorno / deportación
 - a. Situación de la deportación y el retorno a Honduras desde EEUU y México.
 - b. Riesgos del retorno y migración circular
4. Medidas especiales de protección:
 - a. Niñez migrante
 - b. Mujeres migrantes
 - c. Migrantes mutilados en la ruta y víctimas de violencia
 - d. Familiares de migrantes desaparecidos y/o asesinados en la ruta
 - e. Migrantes repatriados y deportados

CAPÍTULO III Conclusiones y recomendaciones

FUENTES

Resumen Ejecutivo

La Misión Internacional de Verificación (MIV) se realizó con tres objetivos:

Comprender las causas actuales de la migración forzada en Honduras y desde ellas desarrollar las valoraciones necesarias para que sean tratadas en el marco del derecho internacional de refugio/exilio y demás estándares de protección internacional a los derechos humanos.

Identificar tipologías y presuntas responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos a la población migrante durante la salida, el tránsito y los procesos de repatriación que sustenten la necesidad de adopción de mecanismos de protección internacional.

Recomendar al gobierno de Honduras, a los gobiernos de la región, a la comunidad internacional, así como a la sociedad civil con el objeto de proponer soluciones a los problemas encontrados por la MIV.

1. Causas del desplazamiento y la migración forzada en Honduras

Violencia e impunidad. La violencia es una de las grandes causas que opera en Honduras como factor de expulsión. Actualmente, Honduras es el país que tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, por lo que existe una situación de violencia generalizada que fuerza la salida del país de decenas de miles de personas. La violencia es causada principalmente por las maras o pandillas y también por el crimen organizado. Una de las consecuencias más alarmantes es la existencia de desplazamiento interno, problema que ha sido reconocido por gobierno de Honduras.

La violencia está estrechamente vinculada a los altos niveles de impunidad existentes en Honduras y se estima que el 80% de los delitos cometidos no se denuncian. El problema de la impunidad está muy relacionado con el actual escenario político y de derechos humanos que se vive. Las movilizaciones sociales son criminalizadas y duramente reprimidas, existen 14 casos de defensores de derechos humanos con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han sido asesinados. También existe el problema de la militarización del país y la asunción por parte del Ejército de funciones propias de cuerpos de seguridad ciudadana.

La falta de empleo y oportunidades de trabajo. Es el principal motivo que fuerza la salida de los hondureños. La falta de empleo se une a la ausencia del derecho a unas condiciones dignas de trabajo, que conllevan bajos salarios, bajos niveles de seguridad y prestaciones sociales y un alto índice de subempleo.

Migración de los niños, niñas y adolescentes (NNA).

Violencia. Es la razón principal que fuerza el desplazamiento de los NNA. Tan sólo en el primer semestre de 2014 hubo en el país 454 muertes violentas de NNA. A su vez, muchos de ellos migran para evitar ser reclutados por las maras y pandillas. La violencia intrafamiliar está presente como un elemento más de la realidad de los menores en el país. La situación se agrava para las niñas y adolescentes, quienes sufren además abusos sexuales y son forzadas sexualmente por los miembros de pandillas o incluso en el ámbito familiar.

La reunificación familiar. Es la otra gran causa de la migración de los NNA y responde a que los padres que ya están en el país de destino deciden traer a sus hijos o bien, aquellos padres

que están en Honduras deciden enviarlos fuera con otros familiares para evitar que sean víctimas de la violencia.

Falta de oportunidades de estudio y explotación laboral. El acceso a la educación es limitado, lo que se traduce en que 1 millón de niños y niñas no van a la escuela. Hay medio millón de niños y niñas que están explotados laboralmente y que ocupan trabajos que les corresponden a los adultos. Un 24% de las adolescentes están embarazadas, lo que dificulta que puedan seguir su formación educativa o sean discriminadas a la hora de conseguir trabajo.

Medidas del Estado hondureño para enfrentar la situación

Medidas institucionales y legales. Para abordar la situación el Estado de Honduras ha puesto en marcha algunas leyes y mecanismos institucionales que crean el marco legal migratorio en el país, pero que no constituyen en sí mismos una política pública y además, presentan algunas carencias:

La Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y sus Familiares, creó el Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño, FOSMIH, pero no existe un reglamento que regule la ejecución de sus recursos.

El Decreto Ejecutivo 33-2014 de Declaración de Emergencia de julio de 2014 fue la medida legal del Gobierno de Honduras ante la llamada “crisis de la niñez migrante”. Mediante un decreto previo se constituyó la Fuerza de Tarea Conjunta del Niño Migrante, liderada por la Primera Dama de Honduras e integrada por varias secretarías del Gobierno de Honduras. El Decreto que la conformó no asignó más recursos humanos y financieros a las instituciones que la integran.

Decreto Ejecutivo de creación de la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia. Si bien es un avance que se haya reconocido la existencia del problema desplazamiento, la Comisión Interinstitucional carece de un reglamento que regule su funcionamiento y no está ejecutando acciones, sino que sólo se queda en el diseño de políticas públicas.

Ley Contra la Trata de Personas en Honduras, también carece de reglamento, lo que impide desarrollarla en su totalidad. También existen problemas de presupuesto para dotar de recursos la implementación y ejecución de la ley.

El Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Es la principal medida de tipo económico que el Gobierno de Honduras quiere implementar para generar desarrollo y oportunidades de trabajo. El Plan pretende dinamizar el sector productivo con políticas activas de atracción de inversión privada y promoción de algunos sectores económicos que se van a privilegiar como el textil, el agroindustrial, la industria ligera y el turismo. El Plan Prosperidad va a profundizar el modelo económico que ya está obligando a las personas a migrar, por lo que hay riesgo de un mayor desplazamiento si la apuesta es implementar megaproyectos, como por ejemplo los de tipo turístico o agroindustriales.

2. La necesidad de protección internacional en la ruta migratoria

Violaciones a los derechos humanos y crímenes contra migrantes. En la ruta migratoria los migrantes son sometidos persistentemente a robos, al cobro de cuotas para movilizarse en el tren conocido como “La Bestia”. También sufren asaltos, secuestros, extorsiones, agresiones físicas y son víctimas de trata, tráfico de personas, así como de asesinatos, masacres y desapariciones forzadas. En el caso de las mujeres, también se dan violaciones y agresiones sexuales. También sufren mutilaciones y lesiones medulares, cuando son arrojados del tren por delincuentes comunes o el crimen organizado.

Los responsables de los abusos y violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes son principalmente el crimen organizado, las maras y pandillas, los mismos coyotes y la delincuencia común. También existen actores estatales que cometen abusos y maltrato contra los migrantes, como por ejemplo las autoridades y políticos, los agentes de migración, las distintas policías, los funcionarios responsables de los centros de detención de migrantes en México y EEUU y el personal sanitario que no atiende adecuadamente a los migrantes mutilados o accidentados en la ruta migratoria.

El Programa Frontera Sur. Es la actual política que rige el tránsito migratorio en México y afecta también a Centroamérica y está teniendo un impacto negativo en la garantía de los derechos humanos de los migrantes. El Programa ha implementado una estrategia de control fronterizo y migratorio que ha llevado a que en el primer semestre de 2015 México deportara a 24,030 migrantes, frente a los 7,740 deportados por EEUU. El Programa Frontera Sur ha tenido un apoyo directo de EEUU bajo el Pilar 3 de la Iniciativa Mérida y actualmente el Ejército y la Marina cuestionan e interrogan a las personas por su estatus migratorio, lo que hacen también las diferentes policías, a pesar de no estar autorizadas para ello, vulnerando la propia ley migratoria de México. La militarización fronteriza y el fuerte control migratorio están haciendo que los migrantes opten por otras rutas menos conocidas, lo que incrementa los riesgos y sus vulnerabilidades.

El acceso a la protección internacional en el tránsito y el destino. El derecho a la protección internacional tiene una connotación más allá de la mera condición de asilo o refugio y sujetos de protección internacional son todos aquellos que están en situación de desplazamiento forzado y en la condición de movilidad, no sólo aquellos a los que se les reconoce formalmente el refugio. En cualquier caso, los mecanismos de asilo en los países de tránsito y destino no garantizan el derecho a la protección internacional, ni responden a la actual situación de desplazamiento forzado por violencia de las y los hondureños. Se ha detectado una política de desincentivo de la solicitud de la condición de refugiado. El caso más claro de ello es México, donde se está observando un patrón de obstaculización y arbitrariedad a la hora de ejecutar los mecanismos de protección internacional. También existen graves carencias y falencias en la protección consular que brinda el Estado hondureño a sus connacionales en la ruta migratoria.

El sistema de asilo en EEUU, como principal país de destino, presenta una serie de obstáculos procedimentales que dificultan el acceso a la condición de refugiado, destacándose el alto nivel de discreción de los funcionarios en la evaluación del temor fundado y la cantidad de filtros que deben pasar los solicitantes hasta tener acceso al derecho a la protección

internacional. Actualmente, los mecanismos de protección internacional a nivel regional no están adecuados a los desafíos planteados por la realidad hondureña, por lo que se detecta la urgencia de continuar avanzando en la aplicación de la definición regional ampliada de refugiado, respondiendo así a las nuevas necesidades de protección internacional causadas sobre todo, por la violencia del crimen organizado transnacional, las pandillas y maras y la debilidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.

El retorno / deportación.

Deportación desde EEUU. Los migrantes llegan a Honduras vía aérea y el Centro de Atención al Migrante Retornado que tiene un protocolo de recepción y les brinda una atención puntual, entregándoles ropa, un kit de aseo, brindándoles servicio médico y facilitándoles un billete de autobús para que puedan llegar a sus lugares de origen.

Deportación desde México. Los migrantes son deportados en autobús en viajes sin paradas que dependiendo del origen, normalmente duran más de 12 horas y en ocasiones son trayectos de 36 horas. Los baños de los autobuses suelen estar en mal estado y los migrantes evitan comer para no usar los sanitarios. A su llegada a Honduras hay una total ausencia de mecanismos de recepción por parte del Estado hondureño. La única atención humanitaria que hay es la brinda un módulo de la Cruz Roja, al que los migrantes pueden acceder si desean. Allí les entregan un kit de aseo, agua, pueden hacer una llamada telefónica y hay asistencia médica básica. Posteriormente, los migrantes tienen que llegar a sus lugares de origen por sus propios medios. Actualmente se da un incumplimiento del *Memorándum de Entendimiento para la repatriación digna, ordenada, ágil y segura de nacionales centroamericanos migrantes vía terrestre.*

Deportación de niños, niñas y adolescentes (NNA). Los NNA y las unidades familiares que son deportadas desde EEUU llegan vía aérea a la base militar estadounidense ubicada en Palmerola. Los NNA deportados desde México, lo hacen en un viaje en autobús sin paradas y llegan al Centro de Recepción de Migrantes El Edén en la ciudad de San Pedro Sula. Los NNA no vienen acompañados por los Oficiales de Protección a la Infancia del Instituto Nacional de Migración de México. En estas condiciones también viajan bebés y mujeres embarazadas. A su llegada a El Edén se les aplica un protocolo de recepción y son albergados por un tiempo de 24 horas hasta que un familiar llega a recoger a los NNA. Se detectó que no hay una atención integral a las necesidades diferenciadas que los NNA y las familias enfrentan para su reintegración en la sociedad y comunidades de origen.

Riesgos del retorno y migración circular. El mayor riesgo existente en el retorno de los migrantes es la ausencia de acciones y programas que permitan en Honduras una reintegración plena en los municipios y comunidades de origen. Hay migrantes deportados que calificarían para la condición de refugiados y en su retorno al país se encuentran con los mismos factores de violencia que forzaron su salida, por lo que presentan una situación de alto riesgo y desprotección. Existe una ausencia de protocolos de atención, protección, seguimiento y reinserción de la población retornada, así como la ausencia de un acompañamiento continuado e integral a personas que han sido víctimas de algún delito o que retornan con alguna discapacidad. Todo ello provoca el incremento de las probabilidades de la migración circular.

Medidas especiales de protección.

Niñez migrante. Los NNA requieren de medidas especiales de protección que actualmente no se llevan a cabo, porque tienen prioridad las políticas centradas en el control de la migración sobre el interés superior y los derechos de la niñez.

Mujeres migrantes. La violencia sexual contra las mujeres se ha convertido en una parte del recorrido de muchas mujeres migrantes, estimándose que seis de cada diez mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual en la ruta migratoria. Se deben aplicar medidas como la no deportación, la protección inmediata y acceso a la justicia.

Migrantes mutilados y víctimas de violencia en la ruta. Los migrantes que han sufrido lesiones o han sido víctimas de violencia durante el tránsito migratorio requieren de una protección adecuada a su especial situación de vulnerabilidad. Las acciones a tomar deben estar enfocadas a la reparación del daño, evitar la revictimización y a otorgar la debida protección internacional o complementaria.

Familiares de migrantes desaparecidos y/o asesinados en la ruta. Los comités de familiares han logrado visibilizar el problema de los migrantes desaparecidos y han documentado más de 400 casos. Ello debe ser abordado desde el derecho a la verdad y por la reparación del daño, como una obligación de los Estados de dar respuesta a sus familiares. Aquí es necesario crear un Mecanismo de Búsqueda Transnacional de Migrantes Desaparecidos que opere a nivel regional.

Migrantes repatriados y deportados. Los instrumentos internacionales sobre las personas refugiadas y desplazadas prohíben la devolución a su país de origen, la expulsión o el rechazo en la frontera, al igual que la privación de la libertad, aún en la ausencia de reconocimiento de la condición jurídica de refugio. Lo anterior se sustenta en que la población migrante hondureña se ha visto forzada a salir de su país por razones de violencia generalizada, violaciones a los derechos humanos, perturbaciones al orden público, por discriminación y violencia sexual y de género.

3. Conclusiones

-El Gobierno de Honduras tiene una visión del problema del desplazamiento forzado y el hecho migratorio como un asunto de ayuda humanitaria y no basado en un enfoque de derechos que mire a las personas migrantes como sujetos de derechos y que institucionalice una política pública que aborde el problema como una cuestión estructural.

-La violencia es un elemento central de la realidad hondureña que también acompaña a las y los migrantes hondureños a lo largo de su tránsito migratorio.

-En Centroamérica, México y EEUU hay una ausencia de mecanismos efectivos de protección internacional que se adapten a los actuales desafíos y necesidades que presenta la realidad de las y los migrantes hondureños.

-La respuesta de los Estados ante el desplazamiento forzado y la migración son políticas basadas en un enfoque de seguridad que no atiende al respeto de los derechos humanos.

Introducción

1. Participantes en la Misión Internacional

La Misión Internacional de Verificación (MIV) estuvo compuesta por personalidades provenientes de América Latina y Estados Unidos integrantes de organizaciones de derechos humanos, del sector religioso, así como de una asamblea legislativa. El perfil de los miembros de la MIV está orientado a personalidades de amplio reconocimiento internacional por su legitimidad y trayectoria en el campo de los derechos humanos, con conocimiento del fenómeno migratorio y de desplazamiento forzado:

Padre Juan Luis Carbajal, Misionero de San Carlos Scalabriniano. Secretario Ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Desde 2014 es el Director de la Casa del Migrante de Ciudad de Guatemala. Cuenta con una amplia trayectoria internacional en el trabajo de promoción de los derechos humanos de las personas migrantes.

Amalia Dolores García Medina, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal de México. Ex Diputada federal de la Cámara de Diputados de México por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde fue Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios. Ex gobernadora del Estado de Zacatecas. Miembro de organizaciones feministas y de la sociedad civil.

Hermana Leticia Gutiérrez Valderrama, Misionera Scalabriniana. Entre 2007 y 2013 fue Secretaria Ejecutiva de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana en la Conferencia Episcopal Mexicana. Actualmente es Secretaria Técnica del CODEMIRE, Colectivo de Defensores/as de Migrantes y Refugiados, integrado por Casas del Migrante y defensores de derechos humanos de los migrantes.

Lisa Haugaard, Directora Ejecutiva del Latin America Working Group (LAWG), con experiencia en temas de derechos humanos en América Latina, con especial seguimiento a la política exterior y cooperación de los EEUU en la región. Ha participado en misiones internacionales de verificación de derechos humanos y migración en Colombia, México y Centroamérica.

Patricia Montes, es Directora Ejecutiva de Centro Presente, organización defensora de los derechos de los inmigrantes en Massachusetts, EEUU. Trabajó en los campos de la comunicación y relaciones públicas antes de migrar a los Estados Unidos. Es miembro de la Junta Directiva de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC).

Pilar Trujillo Uribe, Directora Ejecutiva de Consejería en Proyectos. Educadora, socióloga y ambientalista, vinculada por más de 25 años a los movimientos de mujeres, ambientales y de derechos humanos en Colombia y en varios países de América Latina y África, en los que ha impulsado y participado en iniciativas y procesos nacionales e internacionales en defensa de los derechos humanos y de los territorios en el marco de los desplazamientos y migraciones forzadas.

2. Alcance y objetivos del Informe

El presente Informe expresa las acciones realizadas, la valoración de lo constatado y las recomendaciones desarrolladas por los miembros de la Misión Internacional de Verificación (en adelante MIV) sobre la situación de derechos humanos de la población migrante en Honduras, sus defensores y su derecho a la protección internacional, durante la visita al país entre el 13 y el 17 de julio del 2015. La MIV se realizó con tres objetivos:

- Comprender las causas actuales de la migración forzada en Honduras, y desde ellas desarrollar las valoraciones necesarias para que sean tratadas en el marco del derecho internacional de refugio/exilio y demás estándares de protección internacional a los derechos humanos.
- Identificar tipologías y presuntas responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos a la población migrante durante la salida, el tránsito y los procesos de repatriación, que sustenten la necesidad de adopción de mecanismos de protección internacional.
- Recomendar al gobierno de Honduras, a los distintos gobiernos de la región, así como a la Comunidad Internacional y a la sociedad civil, con el objeto de proponer soluciones a los problemas encontrados por la MIV en su visita a Honduras.

El informe también dará cuenta de lo constatado y valorado a través de las visitas realizadas al punto fronterizo de Corinto, al Centro de Atención al Migrante Retornado de San Pedro Sula y al Centro de Recepción de Migrantes El Edén, así como lo verificado a través de las reuniones con diferentes organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, instituciones del Gobierno y del Estado de Honduras y con la Comunidad Internacional presente en el país.

El presente informe es el desarrollo del preliminar entregado a representantes de la sociedad civil y Estado de Honduras en la conferencia de prensa del 17 de julio del 2015 en Tegucigalpa, manteniendo la misma estructura frente a los avances y desafíos desde la normativa migratoria en Honduras, los aspectos estructurales y del contexto del desplazamiento y la migración forzada, como de los hallazgos sobre violaciones a los derechos en la ruta migratoria, culminando con recomendaciones específicas en cada uno de los aspectos abordados, frente a los diferentes gobiernos de la región.

Este informe pretende hacer también un ejercicio de análisis de la realidad constatada por la MIV, entendiendo el fenómeno del desplazamiento forzado en Honduras desde una perspectiva holística e integral. Es decir, abordando sus causas y vinculándolas con aspectos de tipo estructural, político o jurídico y poniendo todo ello en conexión con temas relevantes de actualidad que están marcando la agenda migratoria y de desplazamiento. A su vez, se ha buscado lanzar una mirada regional a través de la tarea de verificación en un país concreto de la región, como Honduras, pero trascendiendo sus fronteras, porque la problemática enfrentada es una cuestión regional e incluso transnacional.

3. Recorrido de la Misión Internacional de Verificación y sus reuniones

La Misión Internacional de Verificación (MIV) ha estado en Honduras entre los días 13 y 17 julio del año 2015. El día 13 hizo una visita de observación al punto fronterizo de Corinto, por donde ingresan los migrantes hondureños deportados desde México por vía terrestre. Aquí se reunió con el personal de la Cruz Roja que trabaja en el módulo atendiendo a los migrantes deportados. Asimismo, la MIV visitó las instalaciones del puesto del Instituto Nacional de Migración, donde se reunió con el funcionario responsable. En el transcurso de esta visita los miembros de la MIV entrevistaron a varias personas migrantes deportadas que estaban en el punto fronterizo de Corinto.

Ese mismo día 13 de julio la MIV visitó el Centro de Atención al Migrante Retornado de San Pedro Sula (CAMR), donde se recibe a las personas migrantes deportadas desde EEUU por vía aérea. La MIV observó el proceso de recepción de los migrantes deportados, entrevistó a alguno de ellos y se reunió con la persona responsable del CAMR y algunas de las personas que trabajan en el Centro. A su vez, el 13 de julio la MIV estuvo en el Centro de Recepción de Migrantes de El Edén de San Pedro Sula, donde se atienden los niños, niñas, adolescentes y unidades familiares que han sido deportadas a Honduras desde México. En esta visita observó las instalaciones de El Edén y tuvo la oportunidad de hablar con su Director y con diversas personas alojadas en el Centro.

En horas de la tarde los miembros de la MIV se reunieron en el Centro El Edén con la Vicecanciller de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Gobierno de Honduras, con el Director del centro, con representantes de las diferentes Secretarías que hacen parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, así como con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en El Edén: Casa Alianza, Cruz Roja y la Comisión de Acción Social Menonita (CASM).

El 14 de julio la MIV mantuvo en San Pedro Sula un encuentro con varias organizaciones afrohondureñas, como la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), ECOSALUD, la Organización de Desarrollo de las Islas de la Bahía (BIDO), así como con representantes de la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) y con un migrante afrohondureño retornado. En horas de la tarde la MIV se reunió con organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes, como el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Casa Alianza, la Comisión de Acción Social Menonita (CASM) y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

El 15 de julio la MIV se trasladó a Tegucigalpa, donde ese mismo día mantuvo un encuentro con la Comisión Nacional de Apoyo a Migrantes Retornados con Discapacidad (CONAMIREDIS) y con los siguientes Comités de Familiares de Migrantes: Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso (COFAMIPRO), el Comité de Familiares de Migrantes del Centro de Honduras (COFAMICENH), el Comité de Familiares de Cedros, Comité de Familiares de Las Ánimas, el Comité de Familiares de Goascorán, el Comité de Familiares de Tegucigalpa (Red COMIFA), el Comité de Familiares de Namacigüe, el Comité de Familiares La Guadalupe, el Comité de Familiares de Nacaome y la Pastoral de Movilidad Humana de Comayagua. Por la tarde la MIV se reunió con organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos que forman parte de la Plataforma EPU 2015, como el Comité de

Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT).

El día 16 de julio la MIV se reunió con el Embajador de EEUU, el Embajador de la Unión Europea, el Embajador de España, la Embajadora de México, el Consejero Director para América Central de la Embajada de Canadá, una representante de la Embajada de Alemania y personal del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como un analista en Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Seguidamente, la MIV cerró su ronda de reuniones con una representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH).

Finalmente, el viernes 17 de julio los integrantes de la MIV hicieron una presentación pública del Informe Preliminar y posteriormente lo entregaron a representantes de las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Comisión Nacional de Apoyo a Migrantes Retornados con Discapacidad (CONAMIREDIS), Casa Alianza, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Organización de Desarrollo Étnico Comunitario-ODECO, así como a las Hermanas Scalabrinianas. El Informe Preliminar fue también entregado en persona al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras.

4. Metodología

La metodología utilizada en el presente Informe se ha basado en la combinación de los enfoques cualitativo y cuantitativo para lograr una mejor aproximación a la realidad constada, por lo que el trabajo realizado por la MIV se basó tanto en fuentes primarias, como secundarias.

El enfoque cualitativo, se basó en fuentes primarias, como son los testimonios recogidos de las entrevistas mantenidas en las reuniones de los integrantes de la MIV con diferentes miembros de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones del Gobierno y del Estado de Honduras, así como con representantes diplomáticos y de organismos internacionales. Otra de las fuentes primarias fue la visita a lugares relevantes para la realización de tareas de observación y constatación en terreno.

Respecto a las fuentes secundarias del enfoque cualitativo, se acudió a la consulta una serie de informes, leyes, documentos de análisis de la realidad migratoria de la región y de Honduras, con el objeto de completar lo constatado en las entrevistas y testimonios recabados.

En cuanto al enfoque cuantitativo, exclusivamente se utilizaron fuentes secundarias. La obtención de los datos que sirvieron para sustentar y fundamentar la parte cualitativa de la investigación se hizo acudiendo a fuentes calificadas. Se extrajeron datos estadísticos sobre registros de personas migrantes deportadas, estadísticas sobre el número de solicitudes de refugio, tasas homicidios que reflejan el nivel de violencia en Honduras o la tasa de agentes de policía por cada habitante y tasa de agentes privados por cada habitante en Honduras, entre otras relevantes según los apartados temáticos previstos del informe.

CAPÍTULO I Causas del desplazamiento y la migración forzada en Honduras

El primero de los objetivos que se marcó la Misión Internacional de Verificación (MIV) fue la comprensión de las causas actuales de la migración hondureña. Por ello, a lo largo de las entrevistas con migrantes deportados y de las reuniones con distintas organizaciones, la pregunta por las mismas fue una constante. Desentrañar cuáles son los motivos que expulsan a decenas de miles de personas¹ es fundamental para poder aportar soluciones y alternativas a los problemas que operan en la realidad del país. Se trata de no caer en una visión sesgada que vincule la migración únicamente a la violencia, dejando de lado a otras causas de tipo estructural que implican responsabilidades y obligaciones al Estado, como son la falta de oportunidades de trabajo o la pobreza. Es necesario por tanto, contemplar que la migración es multicausal, lo que permitirá tener más objetividad y ofrecer propuestas holísticas.

La MIV constató varias causas principales que a menudo se entrelazan entre sí y que constituyen un patrón causal que motiva la salida forzada de Honduras: en los adultos, la falta de trabajo, la pobreza y la violencia; para los niños, niñas y adolescentes la violencia social e intrafamiliar, la reagrupación familiar y la falta de oportunidades de estudio y las posibilidades de futuro empleo. Por ello, la MIV entendió que en la mayoría de las personas que migran operan varios factores, aunque ello no reduce la intensidad de lo forzado, que es una circunstancia transversal.

1. Violaciones a los derechos humanos

a. La violencia e impunidad

Violencia. Una de las grandes causas que opera en Honduras como factor de expulsión y de desplazamiento forzado es la violencia en sus diferentes modalidades y expresiones. En este sentido, la MIV pudo escuchar diferentes testimonios y casos de personas que habían abandonado sus lugares de origen por el accionar de la violencia, ya fuera esta de tipo intrafamiliar, provocada por las maras, pandillas, grupos del crimen organizado y narcotráfico, así como por otro tipo de actores, por ejemplo agentes de seguridad estatales. Los índices de violencia que se viven expresan una situación insostenible para decenas de miles de familias y personas que tienen que sobrevivir en el país con la tasa de homicidios más alta del mundo².

Atendiendo a los datos del Observatorio de la Violencia, basados en registros del Centro de Operaciones y Estrategia Policial de la Policía Nacional, la MIV encuentra muy relevante que

¹ Según las estimaciones reportadas por el Centro de Atención al Migrante Retornado, se calcula que cada año abandonan Honduras entre 75 y 100 mil personas; unido a este flujo normal de unos 75 mil hombres y mujeres adultas que viajan solas se deben sumar los miles de niños, niñas y adolescentes no acompañados.

² Las tasa de homicidios recogida por la Organización Mundial de la Salud en su Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014, es de 90.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, que es la más alta de mundo actualmente. Ver: file:///C:/Users/megan/Downloads/9789241564793_eng.pdf

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras cifra para el año 2014 la tasa en 68 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, la tasa promedio mundial se sitúa en 6.2 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Ver: <http://www.iudpas.org/pdf/Boletines/Nacional/NEd36EneDic2014.pdf>

en el año 2014 se cometieron un total de 5,936 homicidios³, utilizándose en el 77.9% de los casos un arma de fuego como instrumento. Los homicidios afectan con mucha mayor frecuencia a hombres con el 90.9% (5,398) y el 8.9% (526) de las víctimas fueron mujeres, siendo los hombre y mujeres jóvenes de entre 20 y 24 años el grupo social que presenta más riesgos a su vida⁴. Los departamentos donde se concentran la mayoría de los homicidios son principalmente Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Atlántida y Colón⁵. Dentro de lo altos niveles de violencia, los homicidios se concentran en las cabeceras departamentales y se reducen en el resto de municipios. La MIV se mostró preocupada por la mención del aumento de los casos de “encostalados”, personas que son descuartizadas o picadas dentro de costales.

Una de las consecuencias más alarmantes que encontró la MIV, y que da muestra de la magnitud de la situación, es la existencia de desplazamiento interno causado por la violencia, problema que ha sido reconocido incluso por el Estado de Honduras⁶, siendo éste el único país de Centroamérica que ha legislado sobre el desplazamiento forzado por violencia.

Algunas organizaciones y organismos internacionales calculan que en el país existen en torno a 174 mil desplazados internos, debido fundamentalmente a la violencia provocada por las pandillas, maras y en menor medida por el crimen organizado. Por su posición geográfica, Honduras es un corredor de trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de armas y tráfico de drogas. El crimen organizado ha sabido coludirse en el territorio hondureño, generando en la actualidad verdaderas guerras territoriales y luchas por zonas estratégicas para su comercio, dejando un aumento en el índice de violencia y muertes en el país. Aunque la MIV escuchó testimonios y conoció casos de comunidades y personas que también ha sido desplazadas por la violencia causada por el avance de megaproyectos agroindustriales, turísticos y energéticos, como por ejemplo en comunidades afrohondureñas.

Según indicaron organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos que están trabajando el tema, el desplazamiento se da en un mayor porcentaje por asesinato de un familiar y/o amenazas a muerte. El desplazamiento se da en los municipios y departamentos más violentos de Honduras, mencionados atrás.

Personas en riesgo se desplazan fuera del país, después de agotar todas las instancias estatales sin tener ninguna respuesta, o se desplazan sin interponer ninguna denuncia, debido a su desconfianza en el aparato institucional. En relación a ello, desde el Comisionado

³ Aunque según el informe de ACAPS de mayo de 2014, *Otras situaciones de Violencia en el Triángulo del Norte Centroamericano*, a ello hay que añadir el número de muertes violentas que permanecen sin denunciar o reportar y eventualmente, los desaparecidos encontrados en cementerios o fosas clandestinas.

⁴ Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Observatorio de la Violencia, Boletín N° 36, febrero 2015.

Ver: <http://www.iudpas.org/pdf/Boletines/Nacional/NEd36EneDic2014.pdf>

⁵ *Ibidem*.

⁶ Este reconocimiento se tradujo en que la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, en coordinación con organizaciones de sociedad civil y otras entidades estatales, preparó e impulsó la aprobación de un Decreto Ejecutivo No. PCM-053-2013, el 5 de noviembre de 2013 mediante el cual se creó la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia.

Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), se manifestó a la MIV que cada día reciben a unas tres o cuatro personas solicitando medidas de protección y seguridad y que la mayoría de las personas que acuden a las quejas es porque les han asesinado un familiar. En estos casos el CONADEH orienta a las personas, pero por parte del Estado hondureño hay pocos recursos y programas disponibles eficaces para la reubicación y protección de víctimas de desplazamiento interno a los cuales el CONADEH puede referirles. No existe ni un centro de refugio para personas en riesgo, por lo cual, a veces recomienda que vayan a otros países de Centroamérica, por ejemplo Costa Rica. Por falta de confianza, varias de las personas que llegan al CONADEH no han reportado sus casos a la Policía o al Ministerio Público, lo cual dificulta sus posibilidades de acceso al asilo, aunque el CONADEH sí provee constancias a personas en riesgo. Debido a las carencias de personal y recursos, el CONADEH solicita incluso apoyo al ACNUR y a organizaciones de la sociedad civil.

La MIV tuvo la oportunidad de escuchar casos sobre personas que sufren la persecución, acoso y amenaza por parte de las maras y pandillas. Algunas personas manifestaron que estos grupos llegan a tener un fuerte control social sobre la población en los barrios y comunidades donde están presentes. Tal es así que imponen sus “leyes”, por ejemplo, en algunos lugares las mujeres tienen la prohibición de teñirse el cabello de determinados colores, bajo amenaza de muerte o agresión; o a los jóvenes se le obliga a no vestir determinadas prendas o marcas de calzado deportivo. En esta línea, las maras se fortalecen y nutren de jóvenes y menores a través del reclutamiento forzado, bajo amenazas, para que se unan a sus actividades. Algunas personas testimoniaron que las maras y pandillas son también “brazos” operativos de organizaciones del narcotráfico y que se dedican al narcomenudeo. Las principales actividades que les permiten financiarse son la extorsión a pequeños comerciantes, las amenazas, los robos e incluso la usurpación de viviendas y casas que consideran de su interés para usarlas por ejemplo, como “casas locas”⁷.

Las organizaciones afrohondureñas manifestaron que en el Departamento de Atlántida aumentó la inseguridad en las comunidades locales, aunque no en el mismo grado que en las zonas urbanas. Señalaron que también se está detectando reclutamiento de sus jóvenes por las maras y el narcotráfico a la par que hay un involucramiento por la falta de oportunidades. Sin fuentes de empleo, algunos jóvenes son “contratados” y trabajan para conseguir algo de sustento. La ubicación geográfica de las comunidades es importante, porque están situadas en las rutas del narcotráfico y ello afecta a la población, porque hay jóvenes que son utilizados por los narcos para carga y descarga de droga. Lo que sí señalaron las organizaciones es que no se detecta la existencia de una organización de jóvenes que se dediquen al tema del narcotráfico o narcomenudeo.

Impunidad. La violencia está estrechamente vinculada a los altos niveles de impunidad existentes en Honduras. La MIV observa preocupante que en el 49.2% de los homicidios se desconoce el posible móvil que llevó a los victimarios a cometerlos (2,923), lo que refleja la

⁷ Las llamadas “casas locas” son casas donde las maras llevan a personas para ser torturadas y asesinadas.

falta de investigación criminal en el país⁸. Asimismo, se estima que el 80% de los delitos cometidos no se denuncian, lo que es un claro ejemplo de la impunidad existente⁹.

Este problema está muy relacionado con el actual escenario político y de derechos humanos que vive Honduras, lo que a juicio de la MIV arroja luces sobre por qué están saliendo fuera del país decenas de miles de ciudadanos. En este sentido, la MIV realizó una serie de hallazgos que resultan destacables en relación al tema de la migración y el desplazamiento forzado y las necesidades de protección internacional de las y los hondureños migrantes.

Lo primero a mencionar es que la visita de la MIV coincidió con un contexto de movilizaciones ciudadanas y la huelga de hambre puesta en marcha por varios líderes sociales ante la Casa Presidencial para protestar contra la corrupción, la impunidad¹⁰, a favor de iniciar un proceso constituyente y de la instalación en Honduras de una Comisión Internacional contra la Impunidad¹¹. Pocas semanas atrás se había hecho público el grave caso de corrupción del desfalco de unos 350 millones de dólares al Instituto Hondureño de la Seguridad Social¹². La MIV recibió con gran preocupación la noticia de la agresión por parte de militares y policías a los huelguistas y personas que les estaban apoyando, quienes aparte de ser duramente reprimidos fueron rodeados por miembros efectivos de Seguridad y Defensa para impedir y dificultar el paso de otras personas que quieran apoyarles o mostrar su solidaridad con la huelga de hambre. De este modo, la MIV tuvo constancia de la criminalización de la protesta social, que está estigmatizando a opositores sociales y políticos asociándolos a la desestabilización del país u otras acusaciones, justificando así eventuales represalias contra ellos, aun teniendo la presencia de defensores cobijados con medidas cautelares. De acuerdo con lo anterior, organizaciones de derechos humanos destacaron que existe una coyuntura actual de emergencia y de alta conflictividad social.

Asimismo, la MIV vivió el clima previo al inicio del proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y pudo comprobar algunas reivindicaciones de diversas organizaciones en favor de un proceso de elección transparente, sin injerencias políticas y abierto a la participación de organizaciones de la sociedad civil que apoyen en la elección de la Junta Nominadora, encargada de elegir a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de

⁸ Según datos del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Boletín Enero-Diciembre de 2014, edición N°36, febrero 2015.

Ver: <http://iudpas.org/pdf/Boletines/Nacional/NEd36EneDic2014.pdf>

⁹ La población no confía en la transparencia de los operadores de justicia, principalmente la Policía Nacional y el Ministerio Público. El 80 por ciento de las víctimas de un delito no denuncian los hechos ante las autoridades por considerarlo una pérdida de tiempo, por no tener pruebas, porque los trámites son largos y difíciles, por desconfianza en la autoridad, por miedo al agresor o por miedo a resultar extorsionado.

Ver: <http://www.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/AlFrente/story.csp?cid=566375&sid=300&fid=209>

¹⁰ En relación al problema de la impunidad, uno de los testimonios destacó ante la MIV que el anterior fiscal manifestó que el Ministerio Público en Honduras no cumple sus funciones y que el 80% de los casos no se investigan y quedan en la impunidad.

¹¹ Ver: <http://www.ciprodeh.org.hn/Noticias/ArtMID/3057/ArticleID/2228/EN-HUELGA-DE-HAMBRE-INDIGNACI211N-FUERA-CORRUPTOS-JUSTICIA-Y-ASAMBLEA-NACIONAL-CONSTITUYENTE>

¹² Ver: <https://www.fidh.org/es/americas/honduras/no-mas-impunidad-corrupcion-en-honduras-violenta-derecho-a-la-salud>

Justicia¹³. En relación a ello la MIV escuchó el testimonio de defensores de derechos humanos que indicaron que en Honduras existe un contexto de corrupción muy fuerte y de cooptación del sistema de justicia por parte del poder ejecutivo y algunos de ellos denunciaron que se está dando concentración de poder. Organizaciones informaron que 157 jueces y operadores de justicia han sido separados de sus puestos sin una causa o procedimiento debido, usualmente porque no han cumplido con los intereses particulares de las esferas de poder.

b. Militarización

Una de las preocupaciones expresadas más fuertemente a la MIV por organizaciones de la sociedad civil fue el problema de la militarización del país y la asunción por parte del Ejército de funciones propias de cuerpos de seguridad ciudadana, especialmente con el uso de la Policía Militar de Orden Público¹⁴. Así pues, las organizaciones expresaron que esta estrategia no supone una defensa real de las personas, ya que los militares sólo patrullan los barrios, pero realmente no los protegen, es decir, *“la delincuencia está asentada en las colonias y los militares vienen y van”*¹⁵. Además, la Policía Militar no tiene la capacitación para investigar casos. De esta forma, la MIV constató que la estrategia de seguridad vigente es reactiva y no de carácter preventivo.

A todo ello, hay que añadir otro aspecto enfatizado por las organizaciones de derechos humanos, entendido como una manifestación de la cultura de la militarización que vive el país: la identificación de la seguridad con la represión. Organizaciones de derechos humanos han denunciado una serie de graves violaciones de derechos humanos por parte de la Policía Militar, así como de miembros de otras fuerzas policíacas y militares en años recientes¹⁶, hechos que en su mayoría quedan en la impunidad. Organizaciones señalaron la existencia de una ley especial que no permite a los fiscales ordinarios investigar y procesar judicialmente a los soldados de la Policía Militar del Orden Público, siendo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad el órgano encargado de designar a los fiscales y jueces que acompañan a este cuerpo de policía militar¹⁷. A su vez, la presencia de las fuerzas armadas llega también a las cárceles, algunas de las cuales están en manos de los militares y no de funcionarios civiles o de la policía nacional.

Además, las organizaciones apuntaron que *“la militarización y la seguridad son un gran negocio para el Estado y para los intereses privados”*¹⁸, lo que a juicio de la MIV está evidenciado por la existencia de un contingente de unos 70.000 guardias de empresas de

¹³ Ver: <http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/321-inicia-proceso-de-seleccion-de-nueva-corte-suprema-de-justicia-en-honduras>

¹⁴ Una de las expresiones más significativas ha sido la creación de la Policía Militar de Orden Público con un despliegue de unos 3 mil soldados. Latin America Working Group y Center for International Policy, *Honduras: un gobierno que incumple con proteger a su pueblo*, marzo 2015. Ver: file:///C:/Users/megan/Downloads/Honduras_Spanish_CIPLAWG.pdf

¹⁵ Palabras textuales de una de las personas reunidas con la Misión Internacional.

¹⁶ Según el documento “Human Rights Abuses Allegedly Committed by Military Police and other Forces in Honduras,” Security Assistance Monitor.

Ver: https://docs.google.com/document/d/1755atRHmmM86KuwYC_hG842Ye1SPWsNfNHtagRVCqxM/edit

¹⁷ Existe de facto de un fuero militar dentro de un contexto en el que están aumentando los casos de miembros de la policía militar implicados en asesinatos, tortura y extorsión.

¹⁸ Palabras de uno de los testimonios escuchados por la MIV.

seguridad privadas, cuyos dueños son en buena parte policías o militares activos o retirados. De este número, sólo una minoría trabaja para las 709 empresas registradas ante el gobierno, por lo que la gran mayoría opera sin control gubernamental, y de ellas 307 está registradas como organismos sin fines de lucro, por lo que están exentas de impuestos. Según el Censo de la Secretaría de Seguridad, el número de agentes de policía es de 7.702¹⁹, por lo que hay 1 ciudadano hondureño por cada 1000 efectivos de seguridad privada, frente a 1 ciudadano por cada 113 policías del Estado.

De esta forma, la MIV detecta una privatización de la seguridad y la dejación en manos de empresas privadas de la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad de la población hondureña. Por lo que se da de facto la quiebra del monopolio de violencia por parte del Estado.

c. Violencia contra Defensores, Periodistas y Población Vulnerable

La MIV tuvo conocimiento de graves casos de violaciones de derechos humanos de defensores/as de derechos humanos y periodistas que se están dando en el país. Cuarenta y siete periodistas han sido asesinados desde el golpe de estado en junio de 2009 hasta el fin de 2014, según la organización de libertad de prensa C-Libre²⁰. Ochenta y seis operadores de justicia han sido asesinados desde 2010, según información recogido por la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH)²¹. Por lo menos 31 sindicalistas han sido asesinados desde junio del 2009, según el AFL-CIO²² y existe una grave situación de amenazas contra sindicalistas y la persecución incluso, de sus familiares. Según documentación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH presentada a la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, veintidós defensores/as de derechos humanos han sido asesinados desde 2010²³. La MIV conoció también sobre recientes desapariciones de líderes estudiantiles vinculados a las actuales movilizaciones, así como desalojos violentos de los estudiantes que estaban en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La MIV escuchó también los casos de asesinatos de dos médicos, unos de ellos conocido como “el médico de los pobres”, ya que daba atención médica en áreas marginales.

Una muestra clara de la falta de respuesta de parte del Estado hondureño a la situación enormemente vulnerable de defensores/as y periodistas es la denuncia recibida por la MIV de COFADEH que reveló que 14 defensores de derechos humanos con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían sido asesinadas y que la última víctima fue pocas semanas atrás. Según el testimonio, estos hechos han significado que

¹⁹ Datos del Informe de la Comisión Multinacional de la Alianza por la Paz y la Justicia.

²⁰ Datos del Informe Libertad de Expresión 2014, Comité por la Libre Expresión, C-Libre.

Ver: <https://www.dropbox.com/s/shg7mrb6amjc1lv/informe%20Libertad%20de%20expresi%C3%B3n%202014.pdf?dl=0>

²¹ Datos recogidos en la Observaciones Preliminares sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, diciembre 2014.

Ver: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2014/146A.asp>

²² Según el informe de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, AFL-CIO, *Trade Violence and Migration: The Broken Promises to Honduran Workers*.

Ver: <http://www.aflcio.org/content/download/147761/3770791/file/Honduras.PDF>

²³ Ver: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2014/146A.asp>

algunas de las personas amenazadas ya no quieren medidas cautelares. Además, las organizaciones enfatizaron la falta de investigaciones serias en la mayoría de estos casos y denunciaron la existencia de criminalización a través del uso indebido de procesos legales contra defensores, unido al aumento de las amenazas a muerte a defensores y activistas, principalmente a los defensores de la tierra, políticos de oposición y periodistas. Aunque recientemente se aprobó la Ley de Protección para los/las Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, las organizaciones señalaron la existencia de vacíos y carencias en la misma.

La falta de protección para defensores y periodistas tiene dos importantes vínculos con la situación de desplazamiento forzado. Primero, porque algunos defensores y periodistas mismos han tenido que desplazarse internamente o al exterior. Segundo, porque han tenido que dejar su trabajo o autocensurarse para no exponerse a tanto riesgo.

La población LGBTTI en Honduras enfrenta no solamente discriminación, sino violencia. Ciento setenta y cuatro personas LGBTTI han sido asesinadas en Honduras de 2009 hasta el 1 de diciembre de 2014, según información presentada a la CIDH²⁴. Defensores LGBTTI han sido asesinados y amenazados. A pesar del establecimiento de una sección especial de la Fiscalía para investigar crímenes contra la población LGBTTI, muchos de estos casos, incluyendo algunos de muy alto perfil, quedan en la impunidad. Según la organización Red Lésbica Cattrachas, los crímenes de odio y discriminación laboral contra población LGBTTI es un factor de la migración o desplazamiento externo de población LGBTTI de Honduras²⁵.

Los afrohondureños, otro de los grupos sociales especialmente afectado por la discriminación y la vulneración de derechos humanos, denunciaron ante la MIV que la respuesta del Estado para abordar los problemas de exclusión social y despojos de tierras no ha sido la más adecuada, ya que la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños fue eliminada y sus tareas se rebajaron a un rango institucional inferior, pasando actualmente a la Dirección de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, que es un organismo secundario y con menor presupuesto.

d. Migración de los niños, niñas y adolescentes

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes (NNA) los factores de la migración que intervienen varían, ya que debido a su edad, por ejemplo no es tan determinante la falta de oportunidades de trabajo, como lo puede ser para los adultos. La MIV considera que la situación de los NNA es bastante preocupante, porque entre octubre de 2013 y julio de 2014 fueron detenidos 17.582 menores hondureños²⁶ en la frontera de EEUU, lo que supuso que Honduras fuera el país que tuvo el porcentaje mayor de detenciones de menores de edad no acompañados durante la llamada “crisis de la niñez migrante”. Aunque los números de los NNA hondureños llegando a la frontera con EEUU han bajado, niños, niñas y adolescentes

²⁴ Ver: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2014/146A.asp>

²⁵ Indyra Mendoza, Red Lésbica Cattracha, “Crímenes de Odio por Orientación Sexual e Identidad de Género y su Nexa con la Migración LGBTTI en la Región Centroamericana,” 1 de julio de 2013, y Indyra Mendoza, Red Lésbica Cattrachas, “Discriminación Laboral de las Lesbianas y su Nexa con la Migración,” 2014.

²⁶ Según datos del 2014 del US Customs and Border Protection (CBP).

hondureños siguen saliendo del país, siendo muchos deportados desde México. Según lo que pudo comprobar la MIV, las principales causas que motivan la salida de los NNA son las siguientes:

Violencia. Existe en el país un clima de violencia contra los menores de edad que se manifiesta en que tan sólo de enero a junio de 2014 se reportaron en Honduras 454 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes²⁷. A su vez, algunas organizaciones manifestaron a la MIV que existe reclutamiento forzado de NNA por las maras y pandillas para trabajar, por ejemplo como “banderas”²⁸. Unido a lo anterior, aparece también la violencia intrafamiliar que está presente como un elemento más de la realidad de los menores en el país. Este escenario se ve agravado para las niñas y adolescentes, quienes sufren además abusos sexuales y son forzadas sexualmente por los miembros de pandillas o incluso en el ámbito familiar. Por ello, la violencia emerge como la razón principal para la migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados desde Honduras²⁹.

La reunificación familiar. Es la otra gran causa de la migración de los menores. Este factor está ligado a un contexto familiar en el que los familiares en EEUU urgen a otros miembros de la familia para que emigren y les financian el costo del viaje. Es natural que padres y madres de familia quieran reunir a sus familias y traer a sus niños después de bastante tiempo separados. Testimonios escuchados por la MIV indican que la causa de la reunificación familiar responde también a un cálculo racional de las familias, es decir, si los padres se encuentran en EEUU y están enviando continuamente remesas a sus hijos, entienden que es más económico reagrupar a su familia y pagar de una vez al “coyote” para que les traiga a sus hijo y ya no tiene que enviar más remesas a Honduras. Además, muchos de los NNA que viajan solos en la ruta migratoria lo hacen porque sus padres o familiares en EEUU pagaron al coyote para que los saque del país por la violencia imperante. Aunque algunos hayan sido deportados más de una vez y hayan sufrido violaciones a sus derechos humanos en la ruta migratoria, se sienten obligados a intentar las tres veces que el pago al coyote establece.

Falta de oportunidades de estudio y explotación laboral. Opera también como uno de los motivos que fuerza la salida de menores al exterior del país. En relación a ello, algunas organizaciones enfatizaron que en Honduras existe 1 millón de niños y niñas que no van a la escuela³⁰. A ello se une el que hay medio millón de niños y niñas que están explotados

²⁷ Según los datos recogidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH en su Consideraciones preliminares sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, 5 de diciembre de 2014. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/146A.asp>

²⁸ Banderas son los niños o jóvenes que son reclutados por las maras para hacer labores de vigilancia de una cuadra o esquina y a través de un celular informan sobre quién pasa por la zona o si viene la policía.

²⁹ Según lo que indica el ACNUR en su informe de 2014 *Children on the Run* y lo que concluye el estudio *Niñez y migración en Centro y Norte América: causas, políticas, prácticas y desafíos*, de la Universidad de Hastings y la Universidad Nacional de Lanús.

Ver: http://cgrs.uchastings.edu/sites/default/files/Ninez-Migracion-DerechosHumanos_Espa%C3%B1ol_1.pdf

Ver: http://observatoriocolef.org/admin/documentos/UAC_UNHCR_Children%20on%20the%20Run_Full%20Report.pdf

³⁰ Según el estudio *Niñez y migración en Centro y Norte América: causas, políticas, prácticas y desafíos*, para el 2013 se estimó en 1,680,006 niños y niñas entre 3 y 17 años los que estaban asistiendo a un centro de enseñanza en Honduras; lo que representa el 55.4% de la población entre esas edades.

Ver: http://cgrs.uchastings.edu/sites/default/files/Ninez-Migracion-DerechosHumanos_Espa%C3%B1ol_1.pdf

laboralmente y que ocupan trabajos que le corresponden a los adultos. Una de cada cuatro mujeres adolescentes ha estado embarazada³¹, lo que dificulta que puedan seguir su formación educativa y una estigmatización a la hora de conseguir oportunidades de estudio y trabajo.

2. Situación socioeconómica

a. Modelo de desarrollo

El modelo económico imperante en el país ha conducido a un escenario de bajo desarrollo, ubicando a Honduras, de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano, en la posición 120 en la clasificación mundial y en el puesto 30 de entre los 33 países de América Latina³². La consecuencia más negativa del modelo económico es una situación de alta inequidad, unido a un alarmante nivel de pobreza que sacude al país. En este sentido, en torno al 66% de la población se ubica por debajo de la línea de pobreza, mientras que cerca de un 45% se encuentra en condiciones de extrema pobreza³³, lo que fue destacado ante la MIV por varios de los testimonios.

En cuanto a la desigualdad económica, a juicio de la MIV es muy reseñable que este modelo económico está marcado por una gran concentración de riqueza en pocas manos. Ello se manifiesta en la distribución de los ingresos, donde Honduras ocupa el tercer lugar de los países de América Latina en el ranking de desigualdad de ingresos³⁴. Es decir, el 30% de la población más rica concentra el 70% del ingreso nacional. Por tanto, la MIV considera que la causa de la emigración por falta de empleo o por malas condiciones del trabajo, como por ejemplo los bajos salarios, está íntimamente relacionada con estos indicadores. El 81.9% de los ingresos captados por los hogares hondureños corresponden a ingresos laborales, por lo que las familias dependen enormemente de la existencia de oportunidades de empleo y los salarios, y si estos son demasiado bajos o no hay trabajo, las personas se verán forzadas a emigrar.

Por otro lado, existe otro tipo de inequidad ligada a la concentración de la tierra. Existe en el país una fuerte desigualdad que ha llevado a que haya unas 161 mil familias sin tierra y unas 116 mil familias en parcelas de tierras menores de una hectárea³⁵. Lo que expresa la tendencia histórica de la concentración de la tierra, incrementada en las dos últimas décadas y

³¹ Ver: <https://honduprensa.wordpress.com/tag/embarazos-adolescentes/>

³² Según datos del PNUD del 2012, Honduras tiene un IDH de 0.632, solamente arriba de Nicaragua, Guatemala y Haití en América Latina y el Caribe.

Ver: <http://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/presscenter/articles/2013/03/14/informe-sobre-desarrollo-humano-2013.html>

³³ Datos recogidos por el Banco Interamericano Centroamericano de Integración Económica-BCIE.

Ver: <http://www.bcie.org/uploaded/content/article/1944368211.pdf>

³⁴ La desigualdad de la distribución de ingresos se mide a través del Coeficiente de Gini, el cual se expresa como un número ubicado entre 0 y 1. El cero representa la perfecta igualdad (todos los habitantes del país tienen el mismo ingreso) y el uno, representa la total inequidad (una persona tiene todo el ingreso y los demás no tienen nada). Según el Informe sobre Desarrollo Humano de Honduras de 2011 del PNUD, para el año 2011 Honduras tenía un Coeficiente de Gini de 0.577, es decir el tercer más alto de América Latina, sólo superado por Haití y Colombia. Informe sobre Desarrollo Humano de Honduras de 2011 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD. Ver: http://www.hn.undp.org/content/dam/honduras/docs/publicaciones/INDH_2011_completo.pdf

³⁵ Según recoge el PNUD en su *Informe sobre Desarrollo Humano*, Honduras 2011.

favorecida también por la implementación de megaproyectos de tipo agroindustrial, como la palma africana, que han desencadenado conflictos y despojo de tierras en algunas regiones del país, como en el Bajo Aguán³⁶.

Además, analistas notan el impacto del acuerdo de libre comercio CAFTA sobre la agricultura hondureña. Las importaciones de productos agrícolas de EEUU hasta Honduras se han duplicado desde el inicio de CAFTA³⁷.

Este modelo económico puede consolidarse aún más a través de la llamada Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)³⁸, o *ciudades modelo* que implican la generación de enclaves económicos con regímenes fiscales y financieros especiales asociados a megaproyectos de tipo agroindustrial, centros financieros, centros logísticos, distritos energéticos, zonas turísticas especiales o zonas mineras especiales. Lo que tiene como consecuencia una mayor concentración de recursos en pocas manos.

En relación a estos problemas, la MIV fue testigo de las palabras de las organizaciones afrohondureñas, quienes denunciaron el desplazamiento forzado de comunidades a causa del avance de proyectos turísticos y hoteleros, la compra bajo amenaza y desalojo forzado de tierras por el narcotráfico o el despojo con colusión de las autoridades políticas a través de la re-titulación de tierras comunitarias y las adquisiciones ilegales. Uno de los casos más emblemáticos que mencionaron fue el de Barra Vieja, en el municipio de Tela. Aquí toda una comunidad Garífuna fue expulsada de su territorio por un consorcio público-privado que se hizo de manera extraña con sus tierras y que construyó un complejo hotelero, denunciando incluso a los pobladores de Barra Vieja por usurpación de tierras estatales y criminalizando sus protestas³⁹. El megaproyecto turístico ha ido expandiéndose y desalojando más gente de sus hogares, evidenciado una clara violación del Convenio 169 de la OIT⁴⁰, ratificado por Honduras.

b. La falta de empleo y oportunidades de trabajo

La primera de las causas que obliga la salida de ciudadanos hondureños es la falta de oportunidades de empleo. Este es el principal motivo que la MIV constató para las personas adultas y también para las comunidades de afrohondureños. De acuerdo con datos recogidos

³⁶ Este problema fue constatado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH en sus *Observaciones Preliminares sobre la situación de los derechos humanos en Honduras*, 5 de diciembre de 2014. Ver: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/146A.asp>

³⁷ Según datos de U.S. Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service.

Ver: <http://apps.fas.usda.gov/GATS/>

³⁸ Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) de septiembre de 2013. Esta ley establece zonas de empleo y desarrollo económico con tribunales autónomos e independientes que pueden adoptar sistemas o tradiciones jurídicas de otros países, con regímenes fiscales especiales, autonomía tributaria, con permiso para publicar su propia normativa interna y el permiso para que extranjeros tengan el uso y tenencia de la tierra sin discriminación de su nacionalidad. El objeto de estas ZEDE es facilitar condiciones que permitan al país la inserción en los mercados mundiales bajo reglas altamente competitivas y estables.

Ver: <https://cambiogeneracional.files.wordpress.com/2012/08/ley-orgc3a1nica-de-las-zonas-de-empleo-y-desarrollo-econoc3b3mico-zede-decreto-no-120-312.pdf>

³⁹ Ver: <https://proah.wordpress.com/2015/06/02/la-comunidad-garifuna-de-barra-vieja-a-juicio-por-defender-su-territorio-ancestral/>

⁴⁰ Ver: <http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang-es/index.htm>

por la MIV, la Población Económicamente Activa representa el 42.1% del total nacional, siendo mucho más alta en los hombres, con el 71.0%, que en las mujeres, a quienes les corresponde el 37.4%. La tasa de desempleo es relativamente baja y se estima que se sitúa en el 6.4%, pero el subempleo alcanza unos niveles muy altos. En este sentido, las estimaciones apuntan a que el sector informal de la economía alcanza el 60% aproximadamente⁴¹.

Acompañando a la falta de empleo, la MIV atestiguó la ausencia del derecho a unas condiciones dignas de trabajo, ya que muchos de los testimonios escuchados hacían énfasis en que existe una precarización generalizada de las condiciones de trabajo que padecen buena parte de las y los hondureños. En relación a ello, se constató bajos niveles de seguridad y prestaciones sociales, alto índice de subempleo, incluso dentro de las mismas empresas formales⁴², trabajo a destajo o empleo disfrazado; todo lo cual impide a las familias y las personas alcanzar la canasta básica, que además ha visto incrementada su cuantía⁴³ y que no llega a ser cubierta por el salario mínimo, ya que éste asciende a 7,292.63⁴⁴ lempiras mensuales y sólo alcanza para el 94% de la canasta de alimentos⁴⁵.

La falta de oportunidades de empleo y el trabajo en condiciones precarias guardan una relación directa con la pobreza e incluso con las hambrunas, que fueron otros de los motivos para migrar aducidos por algunas de las personas y organizaciones con los que la MIV mantuvo entrevistas, entrando en vinculación estas dos últimas causas con el modelo económico neoliberal dominante en el país. En cualquier caso, estos factores que fuerzan al desplazamiento y la migración son cruciales, ya que la falta de empleo digno, estar padeciendo hambre o encontrarse en situación de pobreza son cuestiones básicas para el logro de los demás derechos. Como bien apuntó una de las personas reunidas con la MIV *“Honduras es una fábrica de exportar mano de obra”*.

3. Medidas del Estado Hondureño para enfrentar la situación

La MIV realizó una primera constatación, que constituye uno de los más importantes desafíos para el gobierno: Honduras carece de una política migratoria adecuada. El Estado hondureño reconoce la situación severa de migración y de desplazamiento forzado, lo cual es importante. Pero no existe un marco legal suficientemente amplio. Además, los programas para la recepción de migrantes deportados y repatriados son insuficientes. Existen programas para la recepción de migrantes deportados desde EEUU, pero son mínimos y los recursos vienen sobre todo de la sociedad civil. Los programas para la recepción de migrantes adultos

⁴¹ Según datos tomados del Banco Centroamericano de Integración Económica en su ficha estadística de Honduras. A su vez, el sector primario de la economía concentra cerca del 37.8% del total de la población ocupada; el sector secundario, por su parte, abarca el 18.2%; mientras que el sector terciario representa el restante 44.0%. Disponible en: <http://www.bcie.org/uploaded/content/article/1944368211.pdf>

⁴² Según el Informe sobre Desarrollo Humano de Honduras de 2011 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD el nivel de subempleo visible en la pequeña empresa es 69.10%, en la mediana empresa es alcanza el 9.10% y en grandes empresas es el 21.80%. Los niveles de subempleo invisible son mayores en la pequeña empresa con un 75.3%, 9.70% en la mediana empresa y el 15% en empresas de tamaño grande. Disponible en: http://www.hn.undp.org/content/dam/honduras/docs/publicaciones/INDH_2011_completo.pdf

⁴³ Ver: <http://www.latribuna.hn/2015/04/23/42-productos-de-canasta-basica-registran-alzas/>

⁴⁴ Unos 335 dólares.

⁴⁵ Ver: <http://www.elheraldo.hn/economia/837145-213/honduras-canasta-b%C3%A1sica-sube-a-775529-lempiras>

deportados desde México simplemente no existen. Aunque hay un centro de atención para NNA repatriados, los servicios son mínimos y casi no hay recursos y programas para niños, niñas y adolescentes que no pueden regresar a sus hogares y comunidades por razones de violencia. Si los servicios para la recepción de migrantes son mínimos, los servicios para la reintegración y el empleo de migrantes lucen por su ausencia.

Finalmente, los modelos de desarrollo y seguridad no están enfocados al fin de reducir las principales causas de la migración: pobreza y violencia. Al contrario, en cierto modo, pueden contribuir al desplazamiento forzado y la migración. Aunque el enfoque de esta sección es la política migratoria hondureña, cabe señalar que la Comunidad Internacional tiene que asumir su responsabilidad compartida. La Comunidad Internacional, incluyendo los países que están deportando hondureños, EEUU y México principalmente, hasta el momento no están aportando lo suficiente para brindar asilo a las y los hondureños que lo necesitan, ni contribuyendo a mejorar o ayudar a construir programas de recepción, reintegración, ni programas dirigidos a reducir las causas estructurales de la migración masiva del Triangulo Norte.

a. Medidas institucionales y legales

La Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y sus Familiares⁴⁶ es hasta el momento el único marco legal que rige el tema en el país, aunque no constituye en sí mismo una política pública. Según expresó la Vicecanciller, *“la ley es uno de los principales avances realizados por el Gobierno”*, pero la MIV encontró que existen carencias y retos que se deben afrontar.

El Decreto Ejecutivo 33-2014 de Declaración de Emergencia de julio de 2014 fue la reacción legal del Gobierno de Honduras ante la llamada “crisis de la niñez migrante”. De esta forma, el gobierno decretó la emergencia humanitaria en previsión de la supuesta gran cantidad de deportaciones que iban a tener lugar y de la dimensión humanitaria que todo ello implicaría al Estado de Honduras, así como de las medidas de atención a tomar. Previamente constituyó Fuerza de Tarea Conjunta del Niño Migrante, liderada por la Primera Dama de Honduras, y que sustituyó a la Coordinación Institucional e Intersectorial de la Niñez Migrante. La fuerza de Tarea Conjunta está integrada por las Secretarías de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Derechos Humanos, por la Comisión Permanente de Contingencias, la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), la Fiscalía de la Niñez y la organización de la sociedad civil encargada del Centro del Migrante Retornado.

En su diálogo con la Fuerza de Tarea, la MIV constató que si bien el trabajo que vienen realizando es necesario, el Decreto que la conformó no asignó más recursos humanos y financieros a las instituciones que la integran. Por ello, el trabajo que desempeñan es una sobrecarga a las funciones que los funcionarios asignados a la Fuerza de Tarea tienen en sus instituciones correspondientes.

⁴⁶ La Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y sus Familiares, establece la creación del Fondo de Solidaridad
Ver: <http://www.sre.gob.hn/inicio/2014/marzo/leyes/LEY%20DEL%20MIGRANTE%2020140001.pdf>

En este sentido, no existe siquiera un borrador de reglamento que regule la ejecución del Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño, FOSMIH⁴⁷, que cuenta con 5 millones de dólares destinados para atender la problemática. De esta forma, actualmente se ejecuta el presupuesto del fondo, pero utilizando el reglamento del fondo anterior, que no contemplaba todas las necesidades de los migrantes y sus familiares. Igualmente, el gobierno está empleando el FOSMIH solamente para los migrantes deportados de EEUU, lo está utilizando insuficientemente para la niñez migrante y todavía no se está destinando para los migrantes deportados vía terrestre.

Otro de los instrumentos legales que rigen la materia, en este caso del desplazamiento forzado interno, es el Decreto Ejecutivo de creación de la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia⁴⁸. Aquí la MIV considera un avance el que el gobierno de Honduras haya reconocido la existencia del problema desplazamiento, algo que no han hecho otros Estados de la región.

Desde el CONADEH se apuntó que la Comisión Interinstitucional no está ejecutando acciones, sólo se queda en el diseño de políticas públicas. Otra de las carencias detectadas por la MIV es que actualmente no existe un reglamento que regule la Comisión Interinstitucional, por lo que aún hace falta avanzar a nivel legal. A su vez, es necesario poner en marcha una política pública de protección que desarrolle e implemente mecanismos de protección interna de las personas desplazadas. Por ello, es necesario generar la capacidad institucional para brindar atención y crear esa mencionada política pública con las responsabilidades bien definidas de cada uno de los aparatos institucionales con responsabilidades e implicaciones en el problema. Por otro lado, hay necesidad de mejorar los mecanismos de identificación, registro y referencia, así como capacitar a los funcionarios que trabajan con el tema del desplazamiento y las personas desplazadas por violencia.

La MIV entiende que Ley Contra la Trata de Personas en Honduras⁴⁹, aprobada ya en el 2012, constituye un avance importante porque penaliza el reclutamiento forzado de menores de 18 años por el crimen organizado. La falencia es que la ley no se ha implementado en su totalidad, porque todavía no tiene reglamento. Actualmente, se contemplan tres propuestas para reglamentar la ley, pero no se ha decidido ninguna. Por otro lado, también existen problemas de presupuesto para dotar de recursos la implementación y ejecución de la Ley.

b. El Plan de Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte

⁴⁷ Creado por la ley con para sufragar parcial o totalmente los auxilios a hondureños en situación de necesidad para su repatriación voluntaria a Honduras y la de aquellos menores, discapacitados, adultos mayores o personas incapaces, cuya repatriación sea solicitada por los consulados hondureños.

⁴⁸ Decreto Ejecutivo No. PCM-053-2013 del 5 de noviembre de 2013 mediante el cual se creó la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia. La Comisión tiene como funciones la elaboración de investigaciones, estudios y diagnósticos sobre las tendencias del desplazamiento; realizar propuestas de leyes nacionales; promover medidas de prevención del desplazamiento forzado, así como programas de sensibilización, la capacitación de funcionarios y la gestión de recursos para la atención de personas desplazadas por la violencia. Ver: <http://faolex.fao.org/docs/pdf/hon132079.pdf>

⁴⁹ Decreto 59-2012, Ley Contra la Trata de Personas. Ver: <http://chfhonduras.org/wp-content/uploads/downloads/2013/08/Ley%20Trata%20de%20Personas%20Honduras%202013.pdf>

El Plan de la Alianza para la Prosperidad constituye la principal medida de tipo económico que el Gobierno de Honduras quiere implementar para generar desarrollo y oportunidades de trabajo. Debido a la importancia del mismo, fue un tema recurrente en las distintas reuniones que mantuvo la MIV, que pudo comprobar cómo desde el Gobierno se hizo una defensa del Plan Prosperidad al señalar que va a ser la solución a los graves problemas económicos que asolan al país, mientras desde las organizaciones de la sociedad civil se esgrimió una postura crítica. Oficialmente el Plan de la Alianza para la Prosperidad pretende abordar las causas estructurales que obligan a decenas de miles de personas del Triángulo Norte a buscar oportunidades y protección en otros países. Aunque la cuestión es que tal y como está planteado, busca dinamizar el sector productivo a través de la inversión extranjera y concentrando actividades en áreas geográficas estratégicas. Es decir, busca un reforzamiento o consolidación del actual modelo económico⁵⁰.

La MIV escuchó las palabras de la Vicecanciller, quien enfatizó que el Gobierno de Honduras tiene la voluntad e intención de llevar a cabo el Plan Prosperidad aunque no cuente con los fondos para el mismo. Un punto débil de la implementación del Plan surge de la cuestión de la financiación, ya que los Estados del Triángulo Norte, y entre ellos Honduras, no cuentan con los recursos necesarios y están a la espera del apoyo financiero inicial al plan por parte de EEUU, que está en pleno debate sobre si aportar los recursos y de qué forma⁵¹.

A pesar de que el gobierno hondureño sostiene que el Plan intenta mitigar las causas de inmigración, la MIV considera que el enfoque principal no está dirigido a este propósito. El enfoque principal del Plan Prosperidad es la dinamización del sector productivo con políticas activas de atracción de inversión privada y promoción de algunos sectores económicos que se van a privilegiar como el textil, el agroindustrial, la industria ligera y el turismo⁵². La estrategia elegida para potenciar estos sectores es la implementación de políticas de acceso al financiamiento y la promoción de mejoras tecnológicas.

En relación a lo anterior, la MIV conoció las preocupaciones de las organizaciones, que señalaron que el Plan va a profundizar el modelo económico que ya está obligando a las personas a migrar, por lo que hay riesgo de un mayor desplazamiento si se apuesta por implementar megaproyectos, como por ejemplo los de tipo turístico o agroindustriales. Aquí cobra relevancia otro aspecto, como es la voluntad de crear zonas económicas especiales en áreas geográficas rezagadas que ofrecerán un tratamiento diferenciado a las nuevas inversiones y serán apoyadas mediante la provisión de infraestructuras y servicios públicos por parte de los Estados. Para la MIV, esto está en lineamiento con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico o *ciudades modelo*. En relación a ello, algunos testimonios expresaron que las consecuencias del Plan Prosperidad serán una mayor concentración de recursos en

⁵⁰Los ejes estratégicos del Plan Prosperidad están plasmados en el documento *Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte*. Ver: <http://www.presidencia.gob.hn/crisismigrante/wp-content/uploads/2014/09/Plan-Triangulo-Norte-210914-Version-Final-Imprenta-PDF-2.pdf>

⁵¹ La financiación inicial de EEUU al Plan Prosperidad son unos 1000 millones de dólares que en febrero de 2015 el Presidente Obama solicitó al Congreso que se incluyeran en el presupuesto, aunque el asunto se encuentra todavía en discusión.

⁵² Según los *Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte*. Ver: <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39224313>

pocas manos, sin protecciones laborales o ambientales, unido también a la componente de seguridad -establecida en el tercer eje estratégico, que va a promover un mayor control de fronteras e implementar un modelo securitario destinado a blindar las inversiones extranjeras y los megaproyectos.

Fue altamente revelador lo señalado por las organizaciones afrohondureñas, que rescataron las palabras de una representante del Banco Interamericano de Desarrollo, quien al contemplar uno de los complejos hoteleros ubicados en una zona de comunidades Garífuna de la costa atlántica de Honduras, afirmó rotundamente que eso sí era desarrollo⁵³, mientras que estas organizaciones enfatizaron la necesidad de proyectos económicos más incluyentes. En cualquier caso, a juicio de la MIV, el Plan Prosperidad adolece de un enfoque de derechos humanos y no presta suficiente atención a las graves vulneraciones de los derechos humanos que sufren los migrantes, así como tampoco se ofrecen soluciones a la violencia que padecen durante el tránsito migratorio o en el retorno forzado a sus países de origen. En esta línea el Plan Prosperidad tiene una visión de la movilidad humana y del fenómeno de la migración como algo instrumental, evidenciado en el proceso de elaboración del propio Plan, que excluyó a las organizaciones de la sociedad civil, la academia, las iglesias y las organizaciones de migrantes, conduciendo al mismo a ser un proyecto de tipo corporativo y empresarial, cuyos objetivos últimos son impulsar y consolidar grandes inversiones privadas con la participación de los Estados.

c. Obligatoriedad de aplicación del Derecho Internacional

Existen una serie de instrumentos internacionales pertenecientes al sistema universal y regional que conforman el marco legal internacional en relación a los derechos de los migrantes, el derecho a la protección internacional y los derechos de los menores y las mujeres. Estos instrumentos han sido ratificados por el Estado de Honduras, por lo que hacen parte de su ordenamiento jurídico y son de obligado cumplimiento⁵⁴:

- Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967.
- Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.
- Pacto Internacional de Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
- Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.
- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984.
- Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990.
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de 1979.
- Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1966.

⁵³ Hay que apuntar que el Banco Interamericano de Desarrollo-DID funge como secretaría técnica del Plan de la Alianza para la Prosperidad y ha sido también uno de sus impulsores, junto a EEUU.

⁵⁴ Fuentes: Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes-CIDEHUM y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: <http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf>

- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y sus Protocolos para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.

Respecto de los instrumentos regionales se tiene lo siguiente⁵⁵:

- Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de 1994.
- Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, de 1985, ha sido firmada por Honduras, pero tiene pendiente su ratificación.
- Convención Interamericana sobre tráfico internacional de menores, de 1994.

Para que estos instrumentos internacionales, incorporados al ordenamiento jurídico hondureño mediante su ratificación, sean efectivos, necesitan que las instituciones tengan recursos, personal capacitado y mecanismos de control que los implementen, así como la participación activa de sociedad civil para hacer contraloría social y seguimiento a la aplicación real de los mismos. La MIV constató que todavía falta mucho para que estos instrumentos internacionales sean conocidos entre las diferentes instancias gubernamentales, reconocidos y aplicados en una política de cuidado y protección a los derechos humanos.

⁵⁵ Fuente: Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes-CIDEHUM.

CAPÍTULO II La necesidad de protección internacional en la ruta migratoria

1. El tránsito

a. Violaciones a los derechos humanos y crímenes contra migrantes

A través de los testimonios de migrantes deportados, de familiares de migrantes y de organizaciones que trabajan con los migrantes, la Misión Internacional de Verificación (MIV) pudo constatar una serie de violaciones a los derechos humanos que son cometidos en el tránsito migratorio, principalmente en la ruta a través de México. Ello fue enfatizado por un funcionario de la ONU experto en derechos humanos, quien señaló que *“a través de su trabajo han detectado violaciones en todo el proceso migratorio, desde el origen hasta el retorno”*. Lo más preocupante para la MIV es que esta situación de violencia y discriminación que enfrentan los migrantes en el tránsito migratorio no es nueva y aun algunas violaciones van en aumento, fundamentalmente en México, donde en las dos últimas décadas los migrantes han sido un grupo de población altamente vulnerable a diversas violaciones a sus derechos⁵⁶. En este sentido, algunos de los casos que pudo escuchar la MIV fueron verdaderamente alarmantes.

La MIV pudo evidenciar que la migración irregular no sólo es muy peligrosa, sino que también es un gran negocio, porque en la ruta migratoria se mueve mucho dinero por el tráfico de armas, de drogas o de trata de personas; pero también hay otro tipo de negocio que se hace a costa de los migrantes. Los migrantes son sometidos constantemente al cobro de cuotas para movilizarse en el tren conocido como *“La Bestia”*⁵⁷ y los grupos del crimen organizado también les cobran *“derecho de piso”* por transitar por territorios que están bajo su control. El caso de los robos es también muy habitual, ya que los migrantes a menudo son asaltados en el tren o cuando caminan en las rutas migratorias. Todo ello evidencia la falta de una protección efectiva del derecho a la propiedad de los migrantes en tránsito.

Otra forma muy habitual de obtener dinero de los migrantes es mediante secuestros en los que se les pide una cantidad monetaria a las familias, ya sean en EEUU o en Honduras, bajo la amenaza de muerte a los propios migrantes. Para la MIV es muy preocupante este hecho, porque existen otras evidencias que dan muestra de una situación de secuestros masivos y sistemáticos de migrantes en tránsito, principalmente por México que conllevan actos de violencia física, psicológica y sexual, trata de personas, asesinatos, torturas e incluso de desapariciones⁵⁸.

Lo más grave que pudo escuchar y evidenciar la MIV fueron los casos de asesinatos y masacres. Un afrohondureño deportado manifestó cómo a su paso por México fue testigo del asesinato y decapitación de un compañero suyo por no tener la clave que piden las

⁵⁶ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Derechos Humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México*, diciembre 2013.

Ver: <http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/informe-Migrantes-Mexico-2013.pdf>

⁵⁷ El tren llamado popularmente La Bestia, es uno de los principales medios de transporte para los migrantes que tratan de llegar a EEUU atravesando México.

⁵⁸ Según lo recogido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe *Derechos Humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México*.

organizaciones del crimen organizado para dejar pasar a los migrantes por algunos lugares⁵⁹. Llamó la atención la violencia extrema que llegan a sufrir las personas migrantes y su vulneración total del derecho a la vida y a la integridad física. En este sentido, la MIV conoció el testimonio del familiar de una de las personas asesinadas en la masacre de Cadereyta en México, donde en mayo de 2012 fueron encontrados cuarenta y nueve torsos abandonados, todos ellos de personas migrantes. Esta fue la tercera gran masacre contra migrantes después de las dos masacres de San Fernando en Tamaulipas; la primera en el año 2010, cuando fueron secuestrados, torturados y asesinados 72 migrantes y la segunda en el año 2011, cuando fueron encontrados en fosas clandestinas los cuerpos de 193 personas. Siguiendo con la vulneración del derecho a la vida, la MIV escuchó testimonios que atestiguaban casos de personas migrantes muertas en sus intentos de cruzar el río y que sus cuerpos quedaban abandonados. En relación a lo anterior, los Comités de Familiares de Migrantes señalaron a la MIV que tienen documentados más de 400 casos de migrantes desaparecidos a lo largo de la ruta migratoria.

Por el solo hecho de ser mujer, las migrantes hondureñas sufren un mayor riesgo que los hombres durante el tránsito migratorio. Sobre ello la MIV tuvo conocimiento del caso de una adolescente que sufrió abusos sexuales cometidos en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula. Es frecuente que la mayoría de las mujeres que transitan por México no denuncien los abusos que sufren, ya sea porque desconocen sus derechos o porque temen ser detenidas. La condición de irregularidad las condiciona a permanecer invisibles ante las autoridades, debido al constante miedo a ser detenidas y deportadas. Por ello, su acceso a los mecanismos de justicia en los países de tránsito es muy limitado, si no privado. Esta condición de desprotección es aprovechada por agentes de migración o policiales, así como por el crimen organizado, que trafica y recluta forzosamente a las mujeres con fines de Trata⁶⁰. A su vez, las niñas y las adolescentes, son quienes se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad de ser víctimas de trata de personas con fines explotación sexual, prostitución o explotación en el servicio doméstico.

La MIV constató también la vulneración del derecho a la integridad física y a la salud que sufren los migrantes hondureños en el tránsito migratorio. Aquí requiere especial mención el testimonio de una mujer que quedó mutilada por el tren y contó a la MIV cómo después de los accidentes se dan casos de carencias en el acceso al derecho a la salud, malas praxis y negligencias médicas que dificultan a los migrantes poder colocarse posteriormente una prótesis⁶¹. La MIV pudo comprobar que los accidentes que sufren los migrantes cuando viajan

⁵⁹ En el paso por determinadas zonas los grupos del crimen organizado piden a los migrantes una clave obtenida por medio de su coyote previo pago. Esta clave supone que el coyote ha pagado también a los grupos del crimen organizado y está autorizado a llevar gente por las zonas controladas por estos grupos. Si los migrantes viajan sin la clave están expuestos a que los grupos del crimen organizado les pueden matar.

⁶⁰ En relación a ello, un estudio del proyecto Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica de la CEPAL advierte que en torno al 60% de las mujeres migrantes en tránsito por Centroamérica y México declaran haber sido víctimas de crímenes sexuales. Ver: <http://www.avina.net/esp/13218/incontext-63/>

⁶¹ Con el fin de obstaculizar el acceso al tren, en los últimos años, y sobre todo después de la implementación del Programa Frontera Sur, las autoridades mexicanas han colocado durmientes de concreto de forma vertical a los costados de las vías ubicados cada dos o tres metros de distancia entre sí. Por lo que, aparte de soportar la vía, los durmientes forman una especie de valla a lo largo de varios kilómetros que impiden el descenso y la subida de las personas a los vagones del tren. Asimismo, se han instalando bardas de concreto con alambrado de púas para

en el tren, les provocan graves lesiones irreversibles, como mutilaciones, daños medulares y secuelas psicológicas. A su vez, la MIV constató a través de una organización que trabaja el tema de salud con personas migrantes, la falta de acceso a medicamentos, así como falta de acompañamiento médico y psicológico para los migrantes que padecen enfermedades de transmisión sexual y VIH.

Por último, la MIV detectó una mayor vulnerabilidad de los afrohondureños en el tránsito migratorio, ya que por su propio color de piel es más fácil que les puedan identificar como migrantes y ello les hace correr más riesgo de ser asaltados o extorsionados. Respecto de los jóvenes afrohondureños, la MIV tuvo conocimiento de casos en los que algunos se quedan en la ruta haciendo de coyotes para trasladar a otros que todavía no saben cómo viajar, con lo cual exponen sus vidas al competirles a los coyotes ya instalados en la ruta.

De esta forma, la MIV pudo constatar que en el tránsito migratorio, sobre todo a través de México, existe una tendencia creciente de abusos y violencia contra la población migrante⁶². Aunque también se detectó que al atravesar Guatemala, los migrantes hondureños sufren violaciones y abusos a sus derechos humanos. Atendiendo a las estadísticas de uno de los principales albergues de migrantes de México, se aprecia que las vulneraciones a los derechos humanos de la población migrante son constantes, siendo los migrantes hondureños los que sufren en su mayor parte dichos hechos violatorios⁶³. Las zonas de mayor riesgo para los migrantes son los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y los ubicados en torno a la zona fronteriza sur, como Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Ante ello, las recientes normas, como la Ley de Migración del año 2011 y su reglamento del 2012⁶⁴, a pesar de introducir algunos avances, como dejar de calificar la estancia irregular como un delito y considerarlo como una falta administrativa, no han servido para proteger a las personas migrantes, sino que se han aplicado como instrumentos de una política migratoria restrictiva y basada en un enfoque de seguridad, consolidando un modelo de persecución y detención de las personas migrantes en tránsito y que no persigue a los responsables de los hechos migratorios, dándose unos altos niveles de impunidad en la ruta migratoria.

b. El Programa Frontera Sur

La MIV comprobó que actualmente el gobierno mexicano redujo su política migratoria a la aplicación del Programa Frontera Sur⁶⁵, lo que afecta también a Centroamérica. La mayor

impedir por completo el acceso a las vías del tren en algunos tramos de las líneas férreas. Todo ello ha incrementado los riesgos y los accidentes sufridos por los migrantes.

Ver: <http://www.sjmmexico.org.mx/wp-content/uploads/2015/07/informe-migrantes-2014.pdf>

⁶² Esta tendencia ha sido también evidenciada y constatada por el informe *Migrantes invisibles, violencia tangible*, de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes-REDODEM.

Ver: <http://www.sjmmexico.org.mx/wp-content/uploads/2015/07/informe-migrantes-2014.pdf>

⁶³ Según las estadísticas de los años 2013 y 2014 del Hogar-Refugio para personas migrantes La 72 de Tenosique Tabasco.

⁶⁴ Ley de Migración de México de 25 de mayo de 2011, texto reformado octubre del 2014.

Ver: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_301014.pdf

⁶⁵ El Programa Frontera Sur fue anunciado públicamente el 7 de julio de 2014 por el Presidente Peña Nieto, oficialmente tiene el objetivo de garantizar la protección y la seguridad de los migrantes y regular el flujo migratorio. El Programa tiene relación con el tema migratorio mediante un encuadre legal establecido en el Decreto del 8 de julio de 2014, por el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la

evidencia de ello fueron las listas del Instituto Nacional de Migración de México mostradas en el puesto de Corinto por el funcionario hondureño de migración, que reportaban las personas deportadas a Honduras y en las que se recogía el lugar donde se realizó la detención en México: en la inmensa mayoría de los casos habían ocurrido en municipios en torno a la frontera sur mexicana. La anterior constatación se debe cruzar con el número de migrantes hondureños deportados solamente en el primer semestre del año 2015 desde México, cuyo número total fue de 24,030 frente a los 7,740 deportados vía aérea desde EEUU⁶⁶. Este es un indicador que da cuenta de la magnitud del impacto que está teniendo el Programa Frontera Sur en la detención y deportación de personas migrantes. Ello está conduciendo a que actualmente México detenga y deporta a Honduras una cantidad tres veces mayor de migrantes de lo que lo hace EEUU.

Esta misma tendencia se ha detectado meses atrás, porque entre octubre de 2014 y abril de 2015 las autoridades mexicanas detuvieron a 92,889 migrantes centroamericanos, frente a las 70,448 detenciones de migrantes centroamericanos que realizó EEUU⁶⁷. Es decir, la tendencia se ha invertido, porque entre octubre de 2013 y abril de 2014 EEUU detuvo a 162,751 migrantes, frente a las 49,893 detenciones practicadas por México⁶⁸. Por ello, la MIV entiende que hay evidencias de una correlación positiva entre la implementación del Programa Frontera Sur y el aumento del número de migrantes detenidos por México, lo que constituye una de las más claras expresiones del mismo.

A juicio de la MIV, lo importante del Programa Frontera Sur es la política de control migratorio que está implementando, ya que tiene un impacto directo en el flujo a través de México. Una de las manifestaciones más evidentes es el establecimiento de un mayor control territorial y de las carreteras hacia el interior de la frontera, por parte de las distintas fuerzas de seguridad y el Ejército. Ello se hace patente a través de la estrategia de los “cinturones de control” llevada a cabo mediante los retenes, fijos o móviles, las patrullas y la vigilancia⁶⁹. Otro de los elementos clave es la participación de las Fuerzas Armadas, en especial de la Marina, en tareas de seguridad pública en la frontera sur. En el caso del Ejército Mexicano, aunque no son responsables de hacer cumplir la ley migratoria, las tropas de tierra cuestionan e interrogan a las personas por su estatus migratorio, lo que también hacen las diferentes policías, a pesar de no estar autorizadas para ello, vulnerando la propia ley migratoria de México.

Frontera Sur y los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo. Este decreto dispone necesaria una coordinación institucional de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno en las entidades estatales que conforman la Frontera Sur de México que esté bajo la responsabilidad directa del Secretario de Gobernación, quien designó un Coordinador de Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur. El 15 de julio de 2014 el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, designó como titular de la Coordinación de Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur al senador Humberto Mayans Canabal, quien había sido hasta ese nombramiento, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos en el Senado de la República.

⁶⁶ Según los datos del Centro de Atención al Migrante Retornado-CAMR de Honduras.

⁶⁷ Según los datos recogidos por el Washington Office on Latin America-WOLA.

Ver: http://www.wola.org/es/noticias/mexico_ahora_detiene_mas_migrantes_centroamericanos_que_los_estado_unidos

⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁹ Ver: <http://www.wola.org/sites/default/files/La%20otra%20frontera.pdf>

Otra cuestión relevante para la MIV es que el Programa Frontera Sur ha tenido un apoyo directo de EEUU bajo el Pilar 3 de la Iniciativa Mérida. En este sentido, entre 2008 y 2015 el Departamento de Estado de EEUU proporcionó equipos para inspecciones, así como equipamiento y entrenamiento relacionados a seguridad fronteriza como parte del paquete de asistencia que ascendía aproximadamente a 2,500 millones de dólares. El Departamento de Defensa de los EEUU también ha brindado entrenamiento a las tropas que patrullan las fronteras de México, equipos de comunicaciones y apoyo para el desarrollo de las capacidades de movilización aérea y patrullaje de México⁷⁰. Ello constata la frase del Subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Interna de EEUU, Alan Bersin, quien afirmó que “ahora nuestra frontera sur es con Guatemala⁷¹. Estas palabras reflejan la realidad: un total de 80,996 hondureños fueron deportados por EEUU y México en el 2014, lo que supuso un 10.3% más que en el 2013.

La MIV considera preocupante que el Programa Frontera Sur introduzca la externalización de la frontera sur de México, mediante ayuda financiera y apoyo político, mejorando la capacidad de control de las fuerzas fronterizas, construyendo infraestructura de control migratorio y logrando acuerdos multilaterales que promuevan políticas de intercepción, pero que omiten asegurar que aquellos migrantes detenidos sean examinados para la protección internacional que necesiten.

De esta forma, la MIV entiende que el Programa Frontera Sur ha tenido unos impactos negativos, porque está generando una serie de condiciones y circunstancias que intensifican hechos de vulneración de los derechos humanos. En este sentido, se puede destacar que la característica principal del nuevo contexto, el incremento y proliferación de la presencia de fuerzas de seguridad y militares, no tiene su correspondencia en un incremento de los mecanismos de control de las mismas y de garantía de los derechos humanos, los cuales siguen siendo escasos e ineficaces. En este sentido, el ejercicio de tareas de seguridad pública y civil por parte del Ejército conlleva graves riesgos, lo que conlleva una mayor posibilidad de que se cometan abusos y violaciones a los derechos humanos⁷². Ligado a lo anterior aparece otro impacto negativo reportado a la MIV, como es el hecho de que la militarización fronteriza y el fuerte control migratorio están haciendo que los migrantes opten por otras rutas menos conocidas, lo que incrementa los riesgos y sus vulnerabilidades, alejándolos así, de los albergues y casas de migrantes que son los espacios de protección y refugio en el tránsito.

c. Responsabilidades en la comisión de violaciones, abusos de autoridad y crímenes

⁷⁰ Según los datos recogidos por Latin American Working Group en su *documento Una Coyuntura Desafiante para la Protección de los Derechos de los Migrantes y los Derechos Humanos en el Triángulo Norte de América Central y a lo largo de la ruta de los migrantes*, julio 2015.

Ver: http://lawg.org/storage/documents/LAWG_Guia_de_IncidenciaProteccion_de_Derechos_de_Migrantes_y_Derechos_Humanos_FINAL.pdf

⁷¹ Ver: <http://latinalista.com/2012/09/historic-partnership-agreements-signed>

⁷² Este problema ha sido destacado también por el Relator Especial de la ONU sobre tortura, quien pide retirar definitivamente a las fuerzas militares de labores relacionadas con la seguridad pública.

Ver: http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1425291.pdf

La MIV pudo comprobar cómo existen distintos actores que son responsables de la comisión de las violaciones de los derechos las personas migrantes y que se pueden clasificar en dos grandes grupos: actores estatales y actores no estatales.

Actores estatales

Políticos y autoridades. La MIV encontró casos en los que estos actores cometen revictimización de las víctimas, por ejemplo después de asesinatos o masacres de migrantes, como la de Cadereyta en México. Aquí las autoridades vincularon a las víctimas al crimen organizado y las acusaron de estar implicadas con actividades ilegales. A juicio de la MIV, este hecho es sumamente grave, en la medida que las autoridades políticas son las primeras responsables en garantizar la seguridad de las personas, de promover la investigación de los asesinatos y los delitos y tienen la obligación de velar por el cumplimiento efectivo de la ley. Asimismo, tienen la responsabilidad y la obligación de legislar incorporando los estándares internacionales de derechos humanos y de protección internacional ratificados por sus Estados.

Agentes de migración. La MIV pudo conocer de casos en los que agentes de migración de México fueron responsables de malos tratos, abusos y de cobro de sobornos a los migrantes para que les dejen continuar su camino. Además, los agentes de migración deciden deportar a migrantes que han sido testigos de delitos y violaciones a los derechos humanos de otros migrantes y los han denunciado, pero ni bajo esas circunstancias o atenuantes deciden detener el proceso de expulsión del país.

Funcionarios de migración en los centros de detención de migrantes. Los funcionarios de las estaciones migratorias de México⁷³ son responsables de mantener detenidas a personas migrantes con amputaciones expuestas sin la adecuada atención médica, lo que en ocasiones les provoca infecciones. Asimismo, funcionarios de la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula fueron señalados por organizaciones como responsables de abusos sexuales a una adolescente. Recientemente se dio el caso del fallecimiento de un hondureño en la Estación Migratoria de Tenosique, después de un fuerte operativo de migración⁷⁴. También existen denuncias por malos tratos y por las malas condiciones higiénicas y de salubridad de estos centros⁷⁵.

Centros de detención de migrantes en EEUU. Organizaciones denunciaron ante la MIV los constantes casos de maltrato que dan a los migrantes en EEUU, les someten a condiciones de frío extremo, incluso a niños, niñas, mujeres, algunas de ellas embarazadas. Para cubrirse sólo les dan cobertor de papel aluminio para que se arropen y duerman en el piso. Además, la

⁷³ Las estaciones migratorias son centros donde se detiene a personas extranjeras o migrantes que no cuentan con un estatus migratorio regular en México. Dependen orgánicamente del Instituto Nacional de Migración, que es una autoridad administrativa y no puede retener más de 36 horas a una persona, pero en la práctica las estaciones migratorias funcionan de manera discrecional y privan de libertad a migrantes incluso durante meses.

⁷⁴ Información recogida por el Hogar-Refugio para personas migrantes La 72

Ver: <http://www.la72.org/?p=585>

⁷⁵ Ello fue constatado por el *Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sobre su Misión a México (21 de abril a 2 de mayo de 2014)*. Diciembre de 2014.

Ver: http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1425291.pdf

situación de detenciones por semanas o meses de familias, incluyendo niños y niñas, es bastante preocupante.

Policía. La MIV escuchó casos en los que la Policía Federal de México asaltó a migrantes adolescentes, les robó su dinero y les infligió malos tratos. Asimismo, una organización de migrantes discapacitados denunció que habían recibido en Honduras a personas con heridas de bala disparadas por la Policía Federal de México. Otro caso reciente fue el de un migrante hondureño que murió ahogado tras la persecución de agentes migración y al que la Policía Federal no auxilió, ni dejó que fuera rescatado⁷⁶. Existen casos de secuestros de migrantes en los que la policía también aparece como responsable por omisión y en colusión con grupos del crimen organizado. En esta línea, un testimonio denunció ante la MIV el caso de un pescador afrohondureño que emigró a EEUU y allí fue asesinado por la policía. El problema es que estos hechos fueron denunciados en diferentes instancias, pero a pesar de las evidencias y de las capturas de los responsables, aún no se había ejercido justicia en EEUU.

Operadores de justicia. La MIV oyó casos en los que autoridades judiciales y funcionarios de justicia son responsables de la vulneración del derecho de los migrantes al debido proceso. Un testimonio informó del caso de una migrante hondureña que viajaba con su hijo de dos años y que fue detenida en Comalapa, Chiapas, acusada sin pruebas de tentativa de homicidio. La mujer se encuentra en prisión a la espera de juicio separada de su hijo, lo que evidencia discriminación y falta de acceso a la justicia. El caso más paradigmático es el de Ángel Amílcar Colón, migrante hondureño detenido en México, torturado, acusado de pertenecer al crimen organizado, al que el Estado mexicano impidió la protección consular y que tras casi 6 años en prisión por un delito no cometido, fue puesto en libertad en diciembre de 2014⁷⁷.

Personal médico y sanitario. Según lo que pudo conocer la MIV, existen casos de médicos y personal sanitario responsables de malas praxis en intervenciones quirúrgicas por omisión del deber de atención médica adecuada en México y también al retorno en Honduras. Ello se da cuando tienen que atender a personas que han sufrido lesiones graves por accidentes en el tren y no se les realizan correctamente las operaciones, por lo que tienen dificultades para posteriormente, ponerse prótesis.

Funcionarios consulares. Varios testimonios señalaron a la MIV que los consulados hondureños no brindan la adecuada protección que requieren los migrantes en tránsito, haciendo dejaciones de sus obligaciones y responsabilidades. Por ejemplo, no hacen las visitas necesarias a los connacionales hondureños en prisión o en las estaciones migratorias, ni tienen mecanismos o protocolos en la identificación de casos de connacionales que puedan aplicar para la condición de refugiados.

Actores no estatales

Grupos del crimen organizado. Según lo que pudo conocer la MIV, son los principales responsables de la violencia y criminalidad que afecta a los migrantes en forma de asesinatos, masacres, extorsiones, secuestros, trata de personas y tráfico de migrantes. A su vez, también

⁷⁶ Ver: <http://www.la72.org/?p=566>

⁷⁷ Ver: <https://honduprensa.wordpress.com/tag/angel-amilcar-colon-quevedo/>

obligan a los migrantes a transportar droga hacia EEUU o les reclutan forzosamente para trabajar en estos grupos criminales. Además, son los grupos que ejercen una mayor violencia contra las personas migrantes, estando coludidos en ocasiones con autoridades. En México la mayor presión contra los migrantes la ejercen en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, es decir, por la ruta más corta para llegar a EEUU. La MIV encontró preocupante que de acuerdo con otras constataciones⁷⁸, en los últimos años estos grupos, especialmente los carteles del narcotráfico, se han ido involucrando cada vez más en actividades relacionadas con el secuestro de migrantes, la trata de personas, el tráfico de migrantes, así como en otros delitos y violaciones a los derechos humanos⁷⁹. Además, la ruta migratoria es la ruta del ilícito, por lo que el crimen organizado mantiene un control y/o disputa del territorio por donde transitan los migrantes.

Maras y pandillas. A tenor de lo que pudo conocer la MIV, estos grupos han ido aumentando su capacidad de accionar en los últimos años y se han convertido también en responsables de actos delictivos y violencia contra los migrantes. Su principal espacio de acción se encuentra en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, donde la violencia que ejercen es una de las causas de la migración, pero sus actividades también se han extendido a lo largo de la ruta migratoria, donde son también responsables de robos, extorsiones, trata de personas y tráfico de migrantes.

Coyotes. La MIV pudo escuchar diversos testimonios en torno al papel que juegan los llamados coyotes en la ruta migratoria. Hubo testimonios que los señalaron como responsables del abandono de los migrantes en la ruta o que los sometían a robos, abusos y engaños con tal de sacarles más dinero. En esta línea, también hubo testimonios que señalaban a los coyotes como tratantes y traficantes de personas o como responsables de trata de mujeres para obligarlas a prostituirse, actuando en colusión con grupos del crimen organizado. Por otro lado, la MIV pudo escuchar una versión en la que se concebía a los coyotes como personas de la comunidad que como conocedores del camino, prestaban un servicio de guía a personas que querían emigrar hacia EEUU. De todos modos, por parte de los gobiernos urge más atención para investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas por coyotes.

Delincuencia común. Las personas que se dedican por su cuenta a asaltar y robar a los migrantes, los amenazan con violencia y en ocasiones llegan a matarlos o herirlos si se resisten. Algunos de ellos operan en el tren, en las carreteras o vías de comunicación de la ruta migratoria. En los últimos años, la denominada delincuencia común ha ido disminuyendo su accionar contra los migrantes, debido a la capacidad que han ido ganando grupos del crimen organizado.

⁷⁸ Según lo que recoge la Comisión Interamericana en su informe, *Derechos Humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México* de diciembre de 2013.

⁷⁹ Los principales grupos que cometen los delitos, secuestros y extorsiones contra los migrantes son el Cartel de Los Zetas y el Cartel del Golfo, que operan en la parte oriental y suroriental de México, justo donde se encuentra la ruta más corta para llegar a EEUU. Ver: <http://www.mientrastantoenmexico.mx/11528/2015/02/12/el-mapa-de-los-carteles-de-la-droga-en-2015/>

Compañías de ferrocarriles. Estas compañías privadas que tienen la concesión del Estado de utilizar las vías no se hacen responsables de los accidentes que suceden en sus trenes, ni tampoco de los delitos que se cometen contra los migrantes en los vagones. En opinión de la MIV, las compañías que operan los ferrocarriles deberían ser también garantes de la seguridad de los migrantes.

d. Acceso a la protección internacional en el tránsito

La MIV entiende que el derecho a la protección internacional tiene una connotación más allá de la mera condición de asilo o refugio y conlleva algunas implicaciones, por ejemplo que los migrantes sean vistos como sujetos de derechos y como seres humanos. Así pues, sujetos de protección internacional son todos aquellos que están en situación de desplazamiento forzado y en la condición de movilidad, no sólo aquellos a los que se les reconoce formalmente el refugio. La protección internacional es también efectiva una vez que las personas migrantes hayan fallecido, por ejemplo a través de la asistencia a las familias, la repatriación de los cuerpos o el apoyo en la asistencia jurídica a las familias en los posteriores procesos judiciales.

El derecho a la protección internacional es a juicio de la MIV el principal mecanismo para brindar refugio a las personas que salen forzosamente de Honduras debido a la violencia. Por ello, es insoslayable tener presente la situación de crisis de derechos humanos que vive el país y el contexto de violencia generalizada que sacude a su sociedad. De esta forma, la MIV encuentra una correlación positiva entre este escenario de violencia y el fuerte incremento de solicitantes hondureños de la condición de refugiado que se dio entre el año 2013 y 2014, pasando de 3,375 a 10,461⁸⁰, habiendo a finales de 2013 un total de 3,289 refugiados provenientes de Honduras. Este dato evidencia la crisis humanitaria que vive Honduras y la necesidad de protección que tienen muchos de sus ciudadanos. Este hecho se refleja en el reconocimiento por parte del Estado de Honduras de la existencia de desplazamiento interno forzado y la creación de una Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia en el año 2013. En la relación a ello, la MIV pudo constatar que este mecanismo no es capaz de brindar la protección a nivel interno, por lo que miles de personas deciden salir del país buscando refugio en otros Estados de la región o en EEUU⁸¹.

A tenor de lo que la MIV halló, el problema se centra principalmente en las políticas de refugio de los países en tránsito. La tendencia detectada es que en la región no existe una garantía efectiva del derecho a la protección internacional, existiendo una política de desincentivo de la solicitud de la condición de refugiado. El caso más claro de ello es México, donde se está observando un patrón de obstaculización y arbitrariedad a la hora de ejecutar los mecanismos de protección internacional, lo que se ve empeorado por algunas características de la propia

⁸⁰ Datos de la Oficina Regional para América Central, Cuba y México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.

⁸¹ Si bien es positivo la existencia de esta Comisión Interinstitucional, actualmente se encuentra en una fase inicial de su funcionamiento, careciendo de reglamento y todavía no se ha generado una política pública que pueda brindar atención y asistencia a aquellas personas desplazadas por la violencia.

legislación mexicana de refugio, ya que los migrantes sólo pueden presentar una solicitud de asilo dentro de los primeros 30 días después de su ingreso al país⁸².

Algunas organizaciones advirtieron que se podría hablar de una política informal por parte del Estado mexicano, a través de la Comisión de Ayuda al Refugiado (COMAR), de desalentar a los solicitantes de asilo de pedir medidas de protección internacional⁸³:

El primer impedimento detectado que obstaculiza el derecho a la solicitud de asilo es que, cuando los migrantes son llevados a la estación migratoria, no son informados de la posibilidad de solicitar asilo y si el migrante lo solicita, son varios los mecanismos de persuasión para evitar que se solicite o se desista del mismo.

Otro de los obstáculos es que al encontrarse los migrantes bajo detención, se dificulta el acceso a un abogado y poder reunir los elementos probatorios que den cuenta de su condición de refugiado.

En caso de que los solicitantes de asilo sean detectados por el Instituto Nacional de Migración, se les mantiene bajo detención en la estación migratoria el tiempo que demore el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Además, existen obstáculos de tipo procedimental, ya que en muchos casos los relatos de los solicitantes registrados en las resoluciones no corresponden con lo manifestado por el solicitante en su entrevista, no se les garantiza aportar pruebas y que las mismas sean estimadas. Unido a ello, los migrantes no están informados que pueden solicitar asilo desde una casa o albergue de migrantes, en vez de hacerlo desde las estaciones migratorias. Según varias fuentes, incluyendo un estudio del Human Rights Institute del Georgetown University Law School, muchos niños, niñas y adolescentes no piden asilo por el temor de seguir encarcelados en un centro de detención⁸⁴

Todo ello se encuentra agravado porque, en caso de que los solicitantes no desistan de su proceso y esperen hasta el final la resolución del mismo, la mayoría de las solicitudes son denegadas⁸⁵ y si quieren interponer recurso, es la misma COMAR quien actúa a modo de autoridad decisoria y de parte en el procedimiento de recurso. Por lo que acaba defendiendo sus resoluciones. Por consiguiente se da un menoscabo de la garantía de protección internacional. La MIV observa con preocupación la falta de garantías que México brinda a las personas con necesidades de protección internacional, ya que por los tratados que ha firmado y ratificado está obligado a disponer de mecanismos efectivos de asilo⁸⁶. Además, de acuerdo a

⁸² Según el artículo 18 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, de 27 de enero de 2011, texto reformado octubre 2014. Ver: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPCAP_301014.pdf

⁸³ Estos obstáculos han sido constatados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe *Derechos Humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México*, diciembre 2013. Ver: <http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/informe-Migrantes-Mexico-2013.pdf>

⁸⁴ Georgetown Law Human Rights Institute, *The Cost of Stemming the Tide*, abril 2015.

Ver: <https://www.law.georgetown.edu/news/press-releases/the-cost-of-stemming-the-tide.cfm>

⁸⁵ Según estadísticas de la COMAR entre 2013 y 2014 sólo se han aprobado el 20 por ciento de las solicitudes de asilo. Ver: http://www.comar.gob.mx/es/COMAR/Estadisticas_COMAR

⁸⁶ En relación a esta materia, México ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de

su propia legislación, está obligado también a informar a las personas migrantes de su derecho a la solicitud de asilo⁸⁷. Por otro lado, la COMAR recibió en 2014 casi el doble de solicitudes de asilo que en 2013⁸⁸, pero su presupuesto sólo se ha visto incrementado un 4% entre 2014 y 2015, por lo que no se adapta a las necesidades existentes, lo que va en detrimento de las garantías de acceso al derecho a la protección internacional⁸⁹.

La MIV entiende que México ocupa para los hondureños un lugar destacado como país de refugio, ya que Honduras es la nacionalidad que ocupa el primer puesto por número de solicitantes en 2014 con 1,035, siendo prácticamente la mitad del total de solicitantes, que fueron 2,137. Esta tendencia se incrementa incluso para los niños, niñas y adolescentes no acompañados solicitantes de asilo, siendo 72 el total y de ellos 42 correspondieron a menores de edad hondureños⁹⁰.

De forma complementaria a lo anterior aparece el problema de las carencias en la protección consular de los migrantes hondureños. Sobre ello la Vicecanciller del Gobierno de Honduras manifestó a la MIV algunos avances en la atención consular, como por ejemplo que *“están abriendo más consulados, están reforzando la protección consular a través de capacitaciones a los funcionarios en la protección consular, se les está monitoreando su trabajo para que brinden un servicio eficaz y transparente, así como la implementación del servicio de llamadas desde los consulados para los hondureños migrantes, lo que facilita detectar casos de violación de derechos humanos en el tránsito”*. La MIV aprecia este reconocimiento de la necesidad de mejorar los servicios consulares y los planes para fortalecerlos. A pesar de estos planes, las organizaciones de defensa de derechos humanos de los migrantes y los comités de familiares hicieron énfasis en que *“los consulados hondureños brindan una insuficiente asistencia a sus connacionales a lo largo de la ruta migratoria y que los mismos consulados carecen de los recursos necesarios para poder ofrecer una atención acorde a la situación que requieren los migrantes en el tránsito”*. La MIV espera que los consulados reciban capacitación y líneas de trabajo claras para mejorar sus servicios a migrantes en riesgo, incluyendo a aquellos que solicitan asilo, los que han sufrido violaciones de derechos, los mutilados en la ruta migratoria y los familiares en búsqueda de migrantes desaparecidos.

Por otro lado, el acceso al derecho a la protección internacional implica también la concurrencia de los organismos internacionales, jugando aquí un papel determinante las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. En este punto la MIV identificó una serie de necesidades de protección que enlazan con las detectadas

1984, La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

⁸⁷ Según establece el artículo 109 de la Ley Nacional de Migración de México.

⁸⁸ En el año 2013 la COMAR recibió 1,296 solicitudes de asilo, en el año 2014 hubo 2,137 solicitantes.

⁸⁹ Según los datos recogidos por Latin American Working Group-LAWG.

Ver: http://lawg.org/storage/documents/LAWG_Guia_de_IncidenciaProteccion_de_Derechos_de_Migrantes_y_Derechos_Humanos_FINAL.pdf

⁹⁰ En el año 2014 la COMAR reconoció la condición de refugiados a 233 ciudadanos hondureños y otorgó protección complementaria a 39, del total de 1,035 solicitantes. Respecto de menores no acompañados hondureños, reconoció la condición de refugiados a 11 y otorgó protección complementaria a 2, de un total de 42 solicitudes recibidas. Ver: http://www.comar.gob.mx/es/COMAR/Estadisticas_COMAR

en el Plan de Acción de Brasil⁹¹. Una de ellas es que la problemática es regional, lo que conlleva una responsabilidad compartida entre los Estados de origen, tránsito y destino, para ofrecer respuestas a las personas desplazadas en función de su nivel de vulnerabilidad. A su vez, se detectó la existencia de dificultades de acceso a los sistemas de asilo, la ausencia de mecanismos de protección efectivos en los países de tránsito, así como una gran debilidad de mecanismos de recepción, registro e identificación de casos de las personas con necesidades de protección internacional.

A juicio de la MIV, todos los anteriores elementos constituyen un escenario en el que el derecho a la solicitud de la condición de refugiado no está garantizado, tanto en el origen, en el tránsito y también en el destino, como se verá más adelante. El contexto de violencia y violación a los derechos humanos que se vive en Honduras requiere de un mayor compromiso por parte de los Estados. Actualmente, los mecanismos de protección internacional a nivel regional no están adecuados a los desafíos planteados por la realidad hondureña, por lo que se detecta la urgencia de continuar avanzando en la aplicación de la definición regional ampliada de refugiado, respondiendo así a las nuevas necesidades de protección internacional causadas sobre todo, por la violencia del crimen organizado transnacional, las pandillas y maras y la debilidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.

2. El destino

a. La solicitud de asilo en el destino: situación de detenciones y deportaciones

Si bien la situación de acceso a la protección internacional en tránsito está muy limitada, el escenario no cambia mucho en el destino. Aquí el principal país es EEUU, cuyas obligaciones internacionales se circunscriben sólo a la ratificación del Protocolo de 1967 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. En cualquier caso, la MIV observó que actualmente el tema del acceso a la protección internacional en EEUU como país de destino, está muy ligado a su particular coyuntura interna, que gira en torno al debate sobre la reforma migratoria, y la llegada de unos 65 mil menores mexicanos y centroamericanos en la llamada “crisis de los menores migrantes”.

En este sentido, es necesario mencionar que en noviembre de 2014 el Presidente Obama formuló unas acciones ejecutivas destinadas a que varios millones de inmigrantes indocumentados se pudieran beneficiar de mecanismos de protección contra la deportación. Estas acciones son un paso sumamente importante y si son implementadas en su totalidad, pueden ayudar a millones de inmigrantes y sus familias. Pero cabe señalar que estas acciones ejecutivas no reemplazan una reforma migratoria comprensiva y excluyeron de su protección a los menores y adultos que habían llegado después de enero de 2014, además vino acompañada de la presión sobre México para aumentar sus deportaciones. La MIV

⁹¹ La Declaración y el Plan de Acción de Brasil son la hoja de ruta que plasman el proceso de Cartagena+30 en el que los países de América Latina y el Caribe diseñaron un nuevo marco regional para responder a los nuevos retos de la protección internacional y la identificación de soluciones para las personas refugiadas, desplazadas y apátridas.

Ver: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9867>

entiende que este hecho es una muestra más de la ausencia de mecanismos efectivos que garanticen el derecho a la protección internacional⁹².

La MIV ve preocupante que el sistema de asilo en EEUU presenta una serie de obstáculos procedimentales que dificultan el acceso a la condición de refugiado. Si al ingresar de manera indocumentada a EEUU, un migrante es detenido por los agentes del Customs and Border Protection (CBP) dentro de la 100 millas al interior de la frontera, se dará inicio inmediatamente al proceso de expulsión expedita del país mediante dos figuras: “*expedited removal*” o “*reinstatement of removal*” si ya ha sido deportado previamente por EEUU. Estos procesos de expulsión son acelerados y van en detrimento de la identificación de solicitantes de asilo y de la garantía del principio de no devolución. Durante los mismos no se informa adecuadamente sobre el derecho a solicitar la protección internacional e incluso se disuade de ello en ocasiones mediante amenazas. Si el migrante expresa cierto temor e informa a los agentes que su vida corre peligro en caso de retorno a su lugar de origen, se activa un proceso especial de solicitud y queda a discreción de los agentes referirle para una evaluación adicional conocida como “evaluación del temor creíble”, realizada por el CBP o el Immigration and Customs Enforcement (ICE), que determinará si realmente sus temores son fundados y necesitaría acceder al mecanismo de asilo. En el caso de pasar la evaluación, remitirían a la persona al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU, conocido como USCIS, quienes realizarían otra entrevista al migrante para determinar si su miedo podría calificarle como solicitante de asilo o de otro tipo de protección. En caso de que los funcionarios determinasen que su temor es fundado, se autorizaría al migrante a presentar ante un tribunal de inmigración una solicitud de asilo, lo que pararía su proceso de deportación mientras el tribunal estudia la solicitud y resuelve si concede o no, la condición de refugiado u otro tipo de protección.

El problema de este mecanismo de protección está en la cantidad de filtros que deben pasar los solicitantes hasta llegar a presentar la solicitud de asilo ante un tribunal competente, lo que los deja expuestos a un alto nivel de discrecionalidad de los funcionarios de migración y posteriormente del USCIS. En este sentido, si un migrante es detenido en frontera por el CBP, este organismo no cuenta con protocolos, ni mecanismos adecuados de recepción e identificación de casos⁹³. Para la MIV resulta preocupante que las entrevistas que hacen primero la CBP o el ICE no ofrecen las debidas garantías para las personas que necesiten solicitar asilo. Todavía ofrecen menos garantías las entrevista hechas por el CBP según detienen a los migrantes, porque son entrevistas cortas que se realizan en estaciones de la patrulla en la misma frontera. Los agentes de migración realizan las entrevistas uniformados en lugares concurridos que no ofrecen confidencialidad a los solicitantes, lo que a menudo les inhibe de contar a fondo su testimonio. Además, en las entrevistas los agentes de migración muestran ante los solicitantes una actitud intimidante y casi amenazante, lo que también

⁹² Según lo recogido por Latin America Working Group (LAWG).

Ver: http://lawg.org/storage/documents/LAWG_Guia_de_IncidenciaProteccion_de_Derechos_de_Migrantes_y_Derechos_Humanos_FINAL.pdf

⁹³ Según lo que recoge el informe de Human Rights Watch “*You don’t have rights here*”. *US Border Screening and returns of Central Americans to Risk of Serious Harm*, 2014. Ver: https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us1014_web_0.pdf

menoscaba la confianza de las personas a la hora revelar sus temores. La entrevista que realiza el ICE para hacer la “evaluación del temor creíble” dura más de 45 minutos y se lleva a cabo al menos 48 horas después de que un migrante esté bajo custodia del ICE.

Otro elemento que ha venido a obstaculizar más el proceso es el “Lesson Plan” de febrero de 2014, que es una directriz a seguir por los funcionarios de migración que conlleva para un solicitante el aumento de la carga de la prueba requerida en el temor fundado⁹⁴. Por último, en caso de que una solicitud de asilo llegue a ser presentada ante un tribunal, las probabilidades de que un juez conceda la condición de refugiado a ciudadano hondureño son muy bajas, porque los jueces de migración aplican un criterio tradicional o clásico respecto del asilo. Es decir, aunque en Honduras exista una situación de violencia generalizada y exista la tasa de homicidio más alta del mundo, la cuestión es que no hay declarado un conflicto armado interno con actores reconocidos en el que exista un grupo social que sea especialmente perseguido. Por ello, habitualmente los jueces estiman que las personas que salen del país lo hacen por cuestiones de delincuencia interna y que no reúnen las condiciones para ser refugiados⁹⁵. De esta forma, si la solicitud no es reconocida se pondrá de nuevo en marcha su proceso de deportación a su lugar de origen.

Finalmente, la Administración Obama creó en noviembre de 2014 un programa de “procesamiento dentro del país”, (“in-country processing program,”), el Programa de Refugio/Libertad Condicional para Menores Centroamericanos (CAM), el cual permite a los padres que residen con estatus legal en EEUU auspiciar a sus hijos en situación de riesgo de violencia para buscar asilo en EEUU, solicitándolo a la embajada de los EEUU en su país de origen. Los padres pueden solicitar que sus hijos sean llevados a EEUU para que se evalúen sus solicitudes de asilo, permitiéndoles así evitar que sus hijos se animen a emprender la peligrosa travesía hacia el norte. Aunque este programa es un pequeño paso adelante y reconoce que algunos menores son desplazados por la violencia, se anticipa que tendrá un impacto limitado por su pequeña escala. La MIV recibió información también de que hay poco conocimiento del proceso, por lo que van a aplicar al mismo menos personas de las esperadas.

3. El retorno / deportación

a. Situación de la deportación y el retorno a Honduras desde EEUU y México.

Deportación desde EEUU. El proceso comienza cuando los migrantes son detenidos, inmediatamente son sometidos al proceso de expulsión, mientras tanto se encuentran en prisiones privados de libertad, lo que puede durar meses, ya que según la ley de migración estadounidense, no tener un estatus migratorio regular constituye un delito. Los migrantes hondureños adultos son deportados de forma colectiva desde EEUU llegando al país vía aérea

⁹⁴ *Ibídem.*

⁹⁵ En relación a ello cabe destacar que “*el derecho estadounidense no se ha adaptado para reconocer las formas de persecución que vienen de actores no-estatales poderosos o que resultan de una combinación de factores políticos y económicos, a pesar del hecho que tales acciones son generadoras de la violencia y desplazamiento en países como Honduras*”. Esta es la conclusión de la Conferencia Jesuita de EEUU en su informe *Consideraciones para los Hondureños y Hondureñas en el Proceso de Asilo en EEUU: Legislación Relevante e Información sobre el País de Origen*, 2014.

Ver: http://jesuits.org/Assets/Publications/File/Honduras_asilo_reporte_FINAL.pdf

y son recibidos en el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), en el aeropuerto de San Pedro Sula.

La MIV pudo observar el proceso de recepción en el CAMR que es atendido por las Hermanas Scalabrinianas con el apoyo de personal voluntario. Una vez que los migrantes deportados llegan, se les brinda una atención puntual y respetuosa que consiste en la entrega de sus ropas y enseres personales. Se les da también un kit individual de aseo y posteriormente se les realiza una encuesta para conocer su edad, género y motivos de su salida de Honduras, entre otros datos. Si han perdido sus documentos en la ruta, allí mismo pueden recibir una copia de su certificado de nacimiento, con lo cual pueden tramitar otros documentos necesarios posteriormente. Si necesitan atención médica, hay un módulo con personal voluntario que les brinda apoyo básico con la posibilidad de ser transferidos al hospital para necesidades más urgentes. Se les ofrece el servicio de llamada telefónica a sus familiares para informarles de su llegada. También se les entrega un boleto de autobús para que puedan regresar y a la salida del CAMR les espera un transporte que les lleva a la estación de autobuses. La MIV pudo constatar cómo la atención brindada es humana, porque llegan frustrados tras su proceso de deportación y se les da una bienvenida al país de manera cálida y cercana. La persona responsable de CAMR advirtió que *“detecta casos de migrantes que llegan desde EEUU que podrían calificar para la condición de refugiado, sin embargo fueron devueltos a Honduras”*.

Deportación desde México. La situación es bastante distinta para los migrantes adultos que llegan deportados desde México, aquí los migrantes son detenidos y encerrados en las estaciones migratorias mientras dura su proceso de expulsión. Una vez finalizado el mismo, los migrantes son deportados de manera colectiva en autobús, normalmente desde Tapachula hasta Honduras, durante más de 12 horas. En el viaje no hay paradas y los testimonios reportaron que los baños de los autobuses se encuentran a menudo en mal estado. Para evitar usar el baño, los migrantes no comen durante el trayecto, aunque la comida que les entregan no siempre está en buen estado. Resultó alarmante para la MIV que en ocasiones, los viajes de deportación de los migrantes salen desde Acayucan, Veracruz, lo que conlleva una duración del trayecto de unas 36 horas.

Una vez llegados a Honduras, los autobuses ingresan por el punto fronterizo de Corinto, donde la MIV observó con preocupación la ausencia de mecanismos de recepción por parte del Estado hondureño en un lugar por donde pasaron 37,525 deportados durante el año 2014 y 24,030 sólo en el primer semestre de 2015. A pesar de haber una presencia estatal a través de la Policía de Frontera, el Instituto Nacional de Migración y el Ejército, la única atención de tipo humanitaria existente es la que brinda el módulo de la Cruz Roja⁹⁶, al que los migrantes pueden acceder si lo desean. Es decir, no existe un protocolo de atención. En caso que las personas deportadas quieran entrar al módulo, hacen fila para ingresar, se les registra su edad y género, se les entrega agua y un kit de aseo personal, específico para mujeres u hombres. Se les ofrece hacer una llamada de tres minutos a familiares o personas de confianza en Honduras o en el extranjero para informar de su situación. Si lo necesitan, también se les

⁹⁶ Este módulo es atendido por 4 voluntarios de Cruz Roja y está ubicado en un local que es propiedad privada de un hotel contiguo.

brinda atención médica⁹⁷. Llamó la atención de la MIV que no hay servicio de baño en las instalaciones de Cruz Roja, ni habilitados en su entorno más cercano, por lo que los migrantes tienen que caminar unos 500 metros hasta las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para poder disponer de un servicio sanitario, aunque es insuficiente para la cantidad de migrantes que llegan. Una vez que salen del módulo de la Cruz Roja, ya no cuentan con más asistencia y por sus propios medios tienen que llegar a su lugar de origen en Honduras.

Cuando llegó la MIV, encontró varias personas deportadas que habían dormido a la intemperie y que estaban esperando que abriera el módulo de Cruz Roja. Ante este hecho, la Policía de Frontera que tiene allí su puesto, informó que el módulo no está abierto las 24 horas, sino que sólo atiende en los horarios en los que llegan los autobuses de migrantes, pero que a veces hay descoordinación de horarios y los migrantes llegan antes de que esté abierto el módulo de atención, por lo que les toca esperar. Los voluntarios de Cruz Roja informaron que el módulo funciona desde el año 2012, aunque al principio lo hacía con menos recursos que en la actualidad, ya que a lo largo del tiempo han ido detectando necesidades y han mejorado la atención.

Los voluntarios informaron que *“la mayoría de los migrantes deportados no quieren volver a su país y que detectan casos de personas que tienen miedo de volver a sus comunidades de origen por el tema de la violencia”*. En relación a ello, Cruz Roja reportó a la MIV que *“los migrantes deportados tienen miedo de contar sus dolencias y traumas del viaje, así como el trato que han recibido por agentes de migración”*. A pesar de ello, a su llegada no se les ofrece ninguna atención o acompañamiento psicosocial, ni existe ningún mecanismo de atención de este tipo; lo que es imprescindible, porque los migrantes llegan con un duro impacto emocional, debido a las experiencias vividas. Otra de las carencias detectadas es que tampoco existe ninguna atención que brinde albergue a los migrantes a su retorno en Corinto. Respecto de las personas que han sufrido algún accidente en la ruta y están discapacitados, son deportados vía aérea y se les recibe en el CAMR de San Pedro Sula, aunque se tuvo constancia de algún caso que llega por vía terrestre.

La MIV detectó un vacío institucional en el trayecto de deportación entre México y Honduras, porque el Instituto Nacional de Migración de México contrata empresas privadas de autobuses y no viajan en los mismos ningún funcionario de migración de México, ni de Honduras, ni de Guatemala a su paso por territorio guatemalteco. De este modo, los chóferes de los autobuses actúan de facto como oficiales de migración, llevando la documentación oficial migratoria y siendo los responsables directos de las personas deportadas, mientras conducen una gran cantidad horas en condiciones de estrés.

Un funcionario del Instituto Nacional de Migración de Honduras en Corinto manifestó que en la revisión de los autobuses a su llegada a Honduras, ellos sólo se aseguran que viajen el número de personas que reflejan los formularios de migración y no verifican los nombres de las personas. También destacó las carencias de personal que tienen, pues sólo cuentan con tres funcionarios, debido a ello solicitan a apoyo a los militares presentes en la frontera,

⁹⁷ Normalmente los casos médicos atendidos remiten a diarreas, dolores de cabeza y malestares generales.

quienes no cuentan con capacitación en temas migratorios, de derechos de migrantes y refugiados y de derechos humanos en general⁹⁸.

A tenor de todas las anteriores constataciones, la MIV pudo evidenciar que hay un incumplimiento del *Memorandum de Entendimiento para la repatriación digna, ordenada, ágil y segura de nacionales centroamericanos migrantes vía terrestre*, firmado por los gobiernos de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua en 2006⁹⁹. Además, la MIV observó preocupante la inexistencia de coordinación entre las instituciones que están presentes en el punto fronterizo de Corinto: Migración, Policía de Frontera, Militares y Cruz Roja. En este sentido, se detectó también la ausencia de coordinación entre las instituciones hondureñas que están en la frontera con las autoridades guatemaltecas. Por lo que es evidente la total ausencia de coordinación institucional en la frontera.

La Vicecanciller de Honduras informó a la MIV que “*desde el gobierno están trabajando para dar solución a lo que sucede en Corinto*”. Por ello, quieren abrir para el mes de septiembre de 2015 un centro de recepción de migrantes en el municipio de Omoa, cerca de Corinto, aprovechando una propiedad incautada al narcotráfico y con recursos del Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño, FOSMIH. Por otro lado, la Vicecanciller manifestó a la MIV que “*el gobierno pretende también cambiar la ruta de repatriación, que normalmente sale de Tapachula y que se pretende que sea desde Tenosique, para que el trayecto sea más corto y no superior a 10 horas*”.

Deportación de niños, niñas, adolescentes y unidades familiares. Los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes y las unidades familiares que son deportadas desde EEUU llegan vía aérea a la base militar estadounidense ubicada en Palmerola. Desde el gobierno se informó a la MIV que actualmente, EEUU está presionando para poner vuelos combinados donde retornen adultos y NNA deportados, algo que Guatemala ya aceptó, pero que el gobierno de Honduras se ha negado a ello en función del interés superior de la niñez.

En cuanto a los menores de edad no acompañados y unidades familiares deportadas desde México, lo hacen vía terrestre y llegan al Centro de Recepción de Migrantes El Edén en la ciudad de San Pedro Sula, dirigido por la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF). Para los NNA deportados las condiciones del viaje son similares a las de los adultos. Es decir, normalmente salen desde Tapachula y no hay paradas durante el trayecto. Los autobuses vienen sólo bajo la responsabilidad de los chóferes y los menores no vienen acompañados por los Oficiales de Protección a la Infancia, los llamados OPIs, del Instituto Nacional de Migración de México, lo que contraviene una de sus funciones y

⁹⁸ De acuerdo a lo señalado por organizaciones, la presencia de los militares en la frontera es muy reciente y no se tiene claro cuáles son las funciones que cumplen en la frontera.

⁹⁹ *Memorandum de Entendimiento entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de la República de El Salvador, de la República de Guatemala, de la República de Honduras y de la República de Nicaragua, para la repatriación digna, ordenada, ágil y segura de nacionales centroamericanos migrantes vía terrestre*, firmado en San Salvador el 7 de julio de 2006.

Ver: <http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/documentosypub/basededatos/legislacionnacional/acuerdosbilaterales/memorandumrepatriacion.pdf>

responsabilidades¹⁰⁰. A su paso por Corinto, los menores y unidades familiares no tienen permitido bajar del autobús, pero si necesitan asistencia de la Cruz Roja, los voluntarios les entregan en el autobús agua y los kits de aseo personal, habiendo también uno especial para los bebés o niños pequeños. Una de las cosas que llamó la atención de la MIV, es que en estos autobuses también viajan bebés y mujeres embarazadas, quienes son deportados en las mismas condiciones que los adultos, aunque tengan una situación de mayor vulnerabilidad.

La MIV observó el proceso de recepción que se hace en el Centro El Edén, allí se les alberga por un tiempo de 24 horas hasta que un familiar llega a recoger a los NNA. A la llegada de éstos y las unidades familiares deportadas, el centro activa un protocolo de atención puesto en marcha por profesionales de la denominada Fuerza Conjunta de Tarea del Niño Migrante¹⁰¹.

El protocolo de recepción fue elaborado con el apoyo de Casa Alianza y está enfocado a dar atención y seguimiento a la situación emocional y psicológica de los menores de edad y las familias a la hora de regresar a sus hogares. Este protocolo define una estrategia integral y lineamientos de atención para la protección que permitan identificar una situación de riesgo que amerite ser atendida de manera específica. El protocolo establece una entrevista única, que permite recabar información y determinar si los NNA requieren de una atención especial para asegurar la protección integral y el interés superior de la niñez. Para ello, algunos organismos internacionales, como OIM, ACNUR y UNICEF, han acompañado y capacitado a la Fuerza de Tarea.

La MIV conoció casos de experiencias exitosas que están mejorando la atención de la niñez retornada, reconociendo que se están haciendo esfuerzos, ya que hay dificultades, por ejemplo la institución es muy reciente, pero los funcionarios que están involucrados en la Fuerza de Tarea tienen un gran compromiso con los NNA que atienden y se sienten apoyados por su gobierno. En cualquier caso, la MIV constató que el esfuerzo interinstitucional que está impulsando la Fuerza Conjunta de Tarea para recibir a la niñez migrante retornada, es un programa piloto para la recepción de NNA y unidades familiares que son deportados desde México por vía terrestre.

La MIV constató que las capacidades de El Edén para dar atención a los menores de edad y unidades familiares son insuficientes. Si bien las organizaciones de la sociedad civil están haciendo al interno del centro una labor que le corresponde al Estado, se detectó que las instituciones del gobierno no mantienen un diálogo permanente con estas organizaciones y existe una centralización de las decisiones en manos de la propia institucionalidad. Por lo que no se vio un reconocimiento gubernamental del trabajo y compromiso de las organizaciones

¹⁰⁰ Según indica la página web del Instituto Nacional de Migración de México, los OPIS tienen la función de acompañar a los menores durante su proceso de repatriación.

Ver: http://www.inm.gob.mx/index.php/page/OPIS_5_funciones

¹⁰¹ La creación de esta Fuerza de Tarea en junio de 2014, bajo el mando de la Primera Dama, vino a sustituir a la Coordinación Institucional e Intersectorial de la Niñez Migrante y fue la medida estrella del Gobierno para hacer frente la supuesta deportación masiva de menores tras la llamada “crisis de la niñez migrante”.

de la sociedad civil a pesar de que soportan buena parte del trabajo de recepción en El Edén. La MIV comprobó el agotamiento y la escasez de recursos de las organizaciones de sociedad civil que brindan su servicio en el centro. Algo que también se hace extensible a las organizaciones de sociedad civil y organizaciones religiosas que trabajan en el país con los migrantes deportados y con las niñas, niños y adolescentes en riesgo, ya que tienen mucha voluntad, pero cuentan con pocos recursos y medios.

Por otro lado, algunas organizaciones manifestaron a la MIV que El Edén no tiene una ubicación adecuada acorde a su objetivo de brindar protección, ya que la zona de San Pedro Sula en la que se encuentra no garantiza las condiciones de seguridad necesarias para los NNA y las familias. En este sentido, organizaciones mencionaron la existencia de acoso exterior por parte de maras y pandillas. Por ello manifestaron que en vez de reformar el centro, dejándolo en la misma ubicación, sería más conveniente trasladarlo a otro lugar más seguro.

De acuerdo a lo observado, la MIV considera que actualmente el Centro el Edén es un lugar para la recepción y entrega de la niñez migrante a algún familiar. Es evidente que se está haciendo un esfuerzo por mejorar la recepción. En este sentido, hay que mencionar que el gobierno ha ordenado reformar el centro para tener unas instalaciones acordes a sus necesidades. También es destacable la estrategia de afrontar la problemática mediante un esfuerzo interinstitucional. Sin embargo, lo que ofrece el centro no es una atención integral de la niñez migrante deportada. Las medidas que se están implementando son unos paliativos a las urgencias existentes en su retorno y no una atención integral a las necesidades diferenciadas que los NNA y las familias enfrentan para su reintegración en la sociedad y comunidades de origen. Tal y como reconoció la Vicecanciller, *“falta mucho por hacer para brindar realmente una protección integral de la niñez retornada; y en los casos de quienes salieron por razones de violencia, existen a día de hoy muchas carencias para protegerles de manera efectiva”*.

b. Riesgos del retorno y migración circular

La MIV constató que el mayor riesgo existente en el retorno de los migrantes es la ausencia de acciones y programas que permitan en Honduras una reintegración plena en los municipios y comunidades de origen. La MIV observa con preocupación esta carencia institucional, porque se detectó que hay migrantes deportados que calificarían para la condición de refugiados y en su retorno al país se encuentran con los mismos factores de violencia que forzaron su salida, por lo que presentan una situación de alto riesgo y desprotección. En relación a ello, el ACNUR señaló que tiene identificados casos de personas asesinadas a su retorno, lo que evidencia la incapacidad de garantizar la protección de las y los deportados.

Al regreso a Honduras persiste la falta de oportunidades y trabajo y no hay apoyo institucional a los migrantes para superar este problema. Una vez que los migrantes son recibidos en el CAMR o ingresan por Corinto, no existen posteriormente programas que den seguimiento a su reintegración social. En este sentido, la MIV constató la ausencia de protocolos de atención, protección, seguimiento y reinserción de la población retornada, así como la ausencia de un acompañamiento continuado e integral a personas que han sido víctimas de algún delito o que retornan con alguna discapacidad. Después de visitar 17

municipios para evaluar programas para la reintegración de niños, niñas y adolescentes retornados, el CONADEH constató “que los Gobiernos Municipales no cuentan con un plan, programa o proyecto que incluye objetivos relacionados con la inserción de la niñez migrante retornada y unidades familiares”¹⁰², aunque en Yoro y Choluteca opera un programa de UNICEF/CONVIDA. Cabe señalar también que muchos migrantes han perdido lo poco que tenían—vendiendo su casa o microempresa, por ejemplo, para pagar el coyote. De esta forma, lo que está sucediendo es que se incrementan las probabilidades de la migración circular, algo que pudo comprobar la MIV en su visita al punto fronterizo de Corinto.

Esta circunstancia es especialmente preocupante en el caso del retorno de los niños, niñas y adolescentes (NNA), aunque la MIV reconoce que también se han dado algunas acciones positivas. Por ejemplo, cuando el gobierno hondureño afrontó a la “crisis de la niñez migrante”, decretó la emergencia humanitaria¹⁰³ y a través de Naciones Unidas se activaron dos *clusters*¹⁰⁴: uno de Atención Temprana, liderado por el PNUD y otro de Protección Internacional, llevado por UNICEF. A los 6 meses de activación de los clusters, se hizo un re-evaluación de la situación y como no hubo un regreso masivo desde EEUU de los miles de NNA, ambos se desactivaron.

En cualquier caso, una de las consecuencias de la activación de los clusters fue que se elaboró un protocolo de atención a la niñez migrante, aplicado en El Edén. Además, actualmente está operativo un Grupo de Protección liderado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) y en el que participan otras agencias de la ONU como ACNUR, UNFPA y UNICEF, así como algunas ONG’s, como Save the Children, Cáritas, Oxfam, Grupo Esfera, el Consejo Noruego para Refugiados y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Este Grupo de Protección está estableciendo un plan de trabajo y se pretende que el problema del desplazamiento interno sea tenido en cuenta como una de las problemáticas a abordar.

Otra de las consecuencias positivas de la declaración de crisis humanitaria fue que el PNUD empezó un proyecto piloto en tres municipios del país para trabajar la reintegración familiar en las comunidades de origen de los niños, niñas y adolescentes no acompañados deportados. No obstante, organizaciones destacaron que este programa de reintegración familiar presenta carencias. Aquí es importante que también se preste más atención a reintegran a los NNA en programas escolares y formativos con el fin de brindarles oportunidades de estudio adecuadas a sus necesidades.

¹⁰² Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, *Informe final de Hallazgos y Recomendaciones del Proyecto “Reintegración Migrantes Retornados” y “Recuperación Temprana Tras la Emergencia por Sequía,”* julio 2015. Ver: <http://conadeh.hn/wp-content/uploads/2015/07/INFORME-HALLAZGO-Y-RECOMENDACIONES-CONADEH1.pdf>

¹⁰³ A través del Decreto Ejecutivo PCM 33-2014 de Declaración de Emergencia. Ver: <http://www.presidencia.gob.hn/transparencia/wp-content/uploads/2014/04/Decreto-Ejecutivo-PCM-033-2014.pdf>

¹⁰⁴ Los clusters son mecanismos de ayuda humanitaria para situaciones de emergencia por desastres naturales, o de otra índole, que requieran la intervención de organismos internacionales en conjunto con el gobierno nacional para afrontar las crisis.

En relación al retorno de los NNA y el tema de la “crisis de la niñez migrante”, las organizaciones de la sociedad civil manifestaron que ha sido instrumentalizado por el Despacho de la Primera Dama- quien dirige la Fuerza de Tarea Conjunta del Niño Migrante- para recibir recursos e intervención de la Cooperación Internacional y que el Estado de Honduras no ha afrontado sus responsabilidades, delegándolas en organizaciones internacionales y de la misma sociedad civil hondureña. Un claro ejemplo de ello es que la Unión Europea y la Embajada de España están gestionando 2.2 millones de dólares para reinserción laboral, atención psicosocial y formación de migrantes retornados, principalmente jóvenes¹⁰⁵. Es imprescindible que el Estado hondureño asuma sus responsabilidades y obligaciones, pero la Comunidad Internacional -especialmente EEUU y México, como principales países que están deportando- debe apoyar también al gobierno hondureño, unido a la participación y contribución de la sociedad civil. Asimismo, la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta y la declaración de crisis de emergencia mostraron que la problemática de la niñez migrante nunca se ha afrontado plena y realmente, sino que ha sido un abordaje coyuntural que no construyó una respuesta estatal en forma de política pública.

Por último, unido a este escenario de carencias institucionales, la MIV detectó que la migración circular existe también por la misma dinámica de la organización de los flujos migratorios y las relaciones entre migrantes y coyotes. En este sentido, el pago a un coyote conlleva tres intentos de llegar a EEUU, por lo que hay migrantes que según llegan deportados, emprenden inmediatamente la ruta, porque todavía disponen de la oportunidad de contar con el coyote.

4. Medidas especiales de protección

a. Niñez migrante

Los niños, niñas y adolescentes (NNA) son uno de los grupos identificados por la MIV como vulnerables y que necesitan medidas especiales de protección. Aquí hay que tener muy presente que la llamada “crisis de la niñez migrante” sigue estando latente y aunque no se han dado las deportaciones masivas desde EEUU, hay una masiva deportación de NNA desde México, que solamente en el primer semestre del 2015 deportó a 3,358 menores¹⁰⁶. Además, el 35% de los menores deportados están en el rango de edad entre los 12 y 17 años, viajaron no acompañados y son los más vulnerables y reincidentes en instituciones de protección¹⁰⁷.

La Vicecanciller del Gobierno de Honduras expresó también su preocupación sobre la niñez migrante y la garantía del respeto al Interés Superior del Niño. En opinión de la MIV, éste debe ser el gran principio rector que oriente los programas, acciones y medidas a adoptar respecto de las NNA. Pero a su vez, debe ser entendido como un derecho a que el interés superior de los NNA sea una consideración que se prime al sopesar distintos intereses para decidir sobre una cuestión que les afecta, tal y como establece el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Así pues, se trata de una cuestión de derechos que conlleva obligaciones

¹⁰⁵ De acuerdo a lo que informó a la MIV el Embajador de la Unión Europea en Honduras.

¹⁰⁶ Según las estadísticas del Centro de Atención al Migrante Retornado proporcionadas por las Hermanas Scalabrinianas.

¹⁰⁷ Dato facilitado por la Pastoral de Movilidad Humana de Honduras.

para los Estados a la hora de adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos por la Convención, de acuerdo a lo que recoge su artículo 4¹⁰⁸.

Por ello, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas de protección a favor de los NNA que se encuentran bajo su jurisdicción; medidas que por un lado, deben incorporar la noción de los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de derecho y por otro, revestir la suficiente especialidad derivada de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Honduras está obligado, ya que forma parte de la Convención, al igual que otros Estados de la región, especialmente México, que como gran país de tránsito y también de destino de los NNA hondureños, tiene implicaciones en la protección de los mismos. Para el caso de EEUU la garantía efectiva del Interés Superior del Niño no está sujeta a sus obligaciones como signatario de la Convención, ya que no ha ratificado la misma, pero sí su aplicación¹⁰⁹.

De acuerdo a los testimonios e información recabada, la MIV constató la situación de extrema vulnerabilidad de la niñez migrante hondureña, algo que se complementa con el hecho de que el 47% de los NNA migrantes de origen centroamericano reportan haber experimentado algún tipo de abuso desde que dejaron su hogar hasta que fueron repatriados¹¹⁰. En este sentido, los NNA hondureños sufren robos, extorsiones, intimidaciones y también son sometidos a situaciones de riesgo durante el arresto y detención por parte de las autoridades migratorias. Todo ello se ve agravado porque en Honduras existe un alto nivel de violencia contra los menores de edad, lo que tiene como consecuencia que la proporción de NNA migrantes no acompañados hondureños con necesidades de protección sea del 57%¹¹¹, según ACNUR.

De esta forma, la MIV entiende que los NNA requieren de medidas especiales de protección que actualmente no se llevan a cabo, porque tienen prioridad las políticas centradas en el control de la migración sobre el interés superior y los derechos de la niñez, fundamentalmente en EEUU y México, donde los Estados deben buscar otros medios alternativos a la detención de los NNA. Por tanto, las medidas de protección deben llevarse a cabo en todos los momentos de la migración:

- En el origen, ya que la violencia que sufren los NNA hondureños actúa como la principal causa que fuerza la migración.
- En el tránsito, donde los NNA hondureños no encuentran en sus consulados la protección necesaria, ya que éstos sólo realizan la función de preparar documentos de viaje y de identidad para los niños y los adolescentes no acompañados, pero se abstienen de analizar si la repatriación es una opción segura y la mejor para el interés superior del niño.

¹⁰⁸ Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989.

Ver: https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf

¹⁰⁹ Lo que sí ha firmado EEUU es la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño del 17 de febrero de 1995.

¹¹⁰ Según lo que recoge la CIDH en su informe *Derechos Humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México*, diciembre 2013.

¹¹¹ Cifra ofrecida por el informe de ACNUR, *Children on the Run*, 2014.

Ver: http://observatoriocolef.org/admin/documentos/UAC_UNHCR_Children%20on%20the%20Run_Full%20Report.pdf

- En el destino, donde no existen mecanismos efectivos de identificación, recepción, registro e identificación de casos de NNA solicitantes de asilo.
- En el retorno, momento en el que el Estado de Honduras presenta una falta de capacidad para garantizar la protección de los NNA deportados y la ausencia de programas que permitan su reintegración plena en sus lugares de origen.

b. Mujeres migrantes

A tenor de lo detectado por la MIV, las mujeres es otro de los grupos que necesita medidas especiales de protección. Las mujeres hondureñas se han convertido en un sujeto migrante a tener en cuenta, aunque normalmente se encuentran invisibilizadas, porque su participación en los flujos migratorios ha estado tradicionalmente muy oculta o a la sombra de la migración masculina. Debido a la especial situación de discriminación que afecta a las mujeres y a las niñas migrantes en razón de su género, la probabilidad de que sean victimizadas mientras se encuentran en el tránsito es mucho mayor, viéndose forzadas por agentes de migración y policiales a ofrecer servicios sexuales a cambio de obtener el permiso de cruzar fronteras. Además, son susceptibles a ser víctimas de trata y caer en redes de explotación sexual y otras formas de trabajo forzado.

En relación a lo anterior, la violencia sexual contra las mujeres merece una especial atención, porque se ha convertido en parte del recorrido de muchas mujeres migrantes en su tránsito hacia EEUU a través de México¹¹². Se estima que hasta seis de cada diez mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual en la ruta migratoria¹¹³. La cuestión es que la violencia misma actúa en Honduras como uno de los principales motivos de la migración entre las mujeres y fuerza la salida del país a miles de ellas. Honduras es uno de los países con la tasa de femicidios más alta del mundo y se tiene constancia de 1,464 víctimas de femicidio entre 2003 y 2010, registrándose sólo en el 2010 más de 300 casos¹¹⁴. Estas alarmantes cifras de violencia contra las mujeres han aumentado en los últimos años, ya que 2,592 mujeres han sido asesinadas de 2010 a noviembre de 2014, habiendo ocurrido 453 muertes violentas de mujeres solamente entre enero y noviembre de 2014¹¹⁵.

La actual situación de desprotección que encuentran las mujeres hondureñas migrantes, favorece la actuación de las redes de tratantes, que aprovechan los altos flujos migratorios para reclutar a sus víctimas y someterlas a crueles formas de explotación. Hay que enfatizar que la región centroamericana y México son espacios de captación, tránsito y explotación para

¹¹² Según lo que concluye la CIDH en su informe *Derechos Humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México*, diciembre 2013.

¹¹³ Cifras recogidas por Amnistía Internacional en su informe *Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México*, 2010.

Ver: <file:///C:/Users/megan/Downloads/amr410142010es.pdf>

¹¹⁴ Datos de Hivos en su informe *Los derechos humanos en Centroamérica en el siglo XXI: del Golpe de Estado en Honduras (2009) al juzgamiento de Ríos Montt en Guatemala (2013)*.

Ver: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33833.pdf>

¹¹⁵ Cifras recogidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH en las *Observaciones preliminares sobre la situación de los derechos humanos en Honduras*, 5 de diciembre de 2014.

Ver: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/146A.asp>

las víctimas de trata. Principalmente, este delito es cometido en casi todos los países de la región con fines de explotación sexual comercial, explotación laboral y turismo sexual¹¹⁶.

Son especialmente vulnerables a la trata de personas las mujeres, niños y niñas¹¹⁷. Por ello los Estados que han firmado y ratificado el Protocolo de Palermo¹¹⁸ se han comprometido a crear mecanismos especiales de protección para las víctimas de este crimen que atenta contra la dignidad humana. Entre las medidas se encuentran la no deportación, la protección inmediata y acceso a la justicia, entre otras¹¹⁹. En ese contexto se hace necesario que los Estados de tránsito y destino implementen los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos para los casos de trata. Igualmente, las organizaciones de sociedad civil deben demandar dichos instrumentos y hacer contraloría social y que las agencias de la ONU encargadas del tema sean garantes de dicha protección internacional, de acuerdo a sus mandatos¹²⁰.

A causa de esta alta vulnerabilidad, la MIV considera necesario generar mecanismos efectivos de protección tanto en origen, como en tránsito, destino y en el retorno. Las medidas y acciones a adoptar han de introducir una perspectiva de género y concebir a las mujeres como sujetos de derecho, protegiendo especialmente a aquellas más vulnerables, por lo que los Estados deben buscar otros medios alternativos a la detención de mujeres embarazadas migrantes.

Asimismo, es necesario apelar a las obligaciones que tienen los Estados en función de la ratificación de varios instrumentos internacionales y regionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de los que hacen parte Honduras, México y otros Estados de la región (aunque EEUU no ha ratificado la primera y no hace parte de la segunda). El objetivo es abordar los factores que exponen a las mujeres a situaciones de vulnerabilidad a la violencia a través de la construcción de políticas que brinden garantía frente a la discriminación, la explotación y el abuso del cual son víctimas.

c. Migrantes mutilados y víctimas de violencia en la ruta

En opinión de la MIV, los migrantes que han sufrido lesiones o han sido víctimas de violencia durante el tránsito migratorio requieren de una protección adecuada a su especial situación de vulnerabilidad. Si bien estas personas ya han sufrido el daño, las acciones a tomar deben estar enfocadas a la reparación del mismo, a evitar la revictimización y a otorgar la debida

¹¹⁶ Ver: <http://www.avina.net/esp/13218/incontext-63/>

¹¹⁷ Según varios organismos internacionales se calcula que un 33 por ciento de las víctimas conocidas de la trata son niños, niñas ya adolescentes. Las niñas (dos de cada tres niños víctimas) junto con las mujeres, ahora representan el 70 por ciento de las víctimas de Trata en todo el mundo.

¹¹⁸ El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el cual entró en vigor hace una década representa un gran paso hacia la lucha contra este delito. Este instrumento internacional hace una llamado para que sean criminalizados todos los actos de la trata de personas, lo que incluye la trata con fines de explotación sexual, los trabajos forzados, extracción de órganos, servidumbre doméstica y otras prácticas similares. Ver: www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf

¹¹⁹ Ver: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_sp.pdf

¹²⁰ UNODC, OIM, OIT, ONU MUJERES, PNUD, UNFPA, entre otras.

protección internacional o complementaria. En este sentido, los comités de familiares de migrantes expresaron a la MIV su exigencia de justicia y reparación para los migrantes víctimas de delitos y que haya castigo a los responsables de las masacres de San Fernando y Cadereyta. Aquí hay que destacar que los comités denunciaron ante la Procuraduría General de la República de México, pero por el momento no se le ha dado seguimiento a la denuncia, por lo que indicaron que seguirán haciendo presión para que sus demandas de justicia y verdad prosperen, ya que es el Estado mexicano quien debe ser garante de dar una respuesta a lo denunciado.

En relación a los migrantes accidentados, es urgente abordar su situación y las necesidades que requieren tanto en tránsito, como en destino y en el retorno. Los casos de accidentes en la ruta migratoria son un problema habitual en México y están muy vinculados al viaje en el tren, conocido como La Bestia. Aquí los migrantes son hostigados por grupos del crimen organizado o delincuentes que les arrojan del tren en marcha y sufren accidentes irreversibles. A veces, la misma presión de las autoridades migratorias y policiales hace que los migrantes se lancen del tren y sufran percances. En caso de accidentes en los países de destino, resulta imprescindible que primero se garantice su acceso al derecho a la salud. Unido a ello, es necesario implementar protocolos adecuados de atención médica para evitar los casos de malas praxis y negligencias médicas, así como establecer medidas de seguimiento y supervisión de las operaciones, cosa que también debe darse en el retorno. Las organizaciones denunciaron que también se ha detectado personal sanitario atendiendo a las personas accidentadas con material médico vencido.

Una vez deportados y debido a su situación de alta vulnerabilidad, los migrantes discapacitados necesitan medidas urgentes. Una de las organizaciones que los agrupa manifestó que hay 450 migrantes asistidos por regresar a Honduras accidentados y lesionados, por ello entienden muy necesario promover en sus municipios de origen el desarrollo de migrantes mutilados. Asimismo, la organización denunció que el Estado conoce esa realidad, pero que no hay voluntad para atender la problemática con recursos y programas. Por ello, los migrantes accidentados se sienten instrumentalizados por las instituciones y el gobierno.

La MIV pudo constatar que por parte de las instituciones hondureñas hay una falta de atención adecuada para las personas mutiladas y discapacitadas, así como la ausencia de acompañamiento psicológico y físico. Una de las demandas de los migrantes discapacitados es la construcción de una casa albergue en Choluteca que les brinde atención y apoyo en su retorno, ya que actualmente no existe ningún lugar de este tipo. A su vez, los familiares de los migrantes discapacitados denunciaron que reciben información incompleta de Cancillería a pocas horas de que arriben las personas mutiladas, por lo que las familias no tienen la posibilidad de organizar su llegada y recepción de manera adecuada. Dentro de los casos de migrantes que han sufrido accidentes, la situación de mayor vulnerabilidad la tienen quienes sufren graves lesiones medulares, ya que necesitan apoyo de por vida: medicinas, rehabilitación emocional y física, así como una mayor atención y cuidados.

Por estos motivos, las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades de Honduras y a los gobiernos de los países ubicados en la ruta migratoria para pedir apoyo económico y emocional para la reinserción de migrantes retornados con discapacidad y la necesidad de adoptar respuestas urgentes. Actualmente México cubre los costos de repatriación de los migrantes mutilados, que desde 2013 los hace vía aérea y Cruz Roja cubre los gastos del tratamiento médico y las prótesis. El problema es que las familias señalaron que este apoyo es sólo hasta la recepción en Honduras y que posteriormente no reciben más ayuda y atención.

d. Familiares de migrantes desaparecidos y/o asesinados en la ruta

La MIV reconoce la labor de los comités de familiares, porque debido a su esfuerzo y compromiso han logrado visibilizar el problema de los migrantes desaparecidos en la ruta y han conseguido documentar más de 400 casos de migrantes desaparecidos. Como defensores de derechos humanos de las personas migrantes, ellos son también otro de los grupos que requieren de especiales medidas de protección. Los comités enfatizaron que el tema de los migrantes desaparecidos debe ser abordado desde el derecho a la verdad y por la reparación del daño, como una obligación de los Estados de dar respuesta a sus familiares; sin que ellos, para saber de las y los desaparecidos, tengan que desplazarse a los países donde se ubica la ruta migratoria, sobre todo México. Por ello, es muy importante el planteamiento de los comités de familiares, que proponen que en las Embajadas de México en los países de la región haya un funcionario asignado para atender a los familiares de migrantes desaparecidos.

Los comités también expresaron ante la MIV su principal demanda: crear y activar el Mecanismo de Búsqueda Transnacional de Migrantes Desaparecidos para que investigue el paradero de los personas migrantes en albergues, centros de detención, psiquiátricos, fosas, hospitales públicos tanto en México, como en Estados Unidos. De manera complementaria al Mecanismo de Búsqueda, demandaron la necesidad de la firma de convenios para el intercambio de información forense entre los países de la ruta migratoria. Existe un banco forense de datos sobre los familiares de los migrantes desaparecidos que tiene información genética de 160 casos para apoyar la búsqueda e identificación, pero es necesario que en cada país se asignen funcionarios específicos que den seguimiento a las demandas de los familiares en la búsqueda y ubicación de los migrantes desaparecidos para su repatriación. En Honduras ha habido algunos avances, luego de la incidencia de los comités, que consiguieron que la Cancillería firmase un convenio para identificar los restos recogidos por el banco forense.

De acuerdo a lo manifestado por los comités, la MIV considera necesario que la Cancillería hondureña aplique los protocolos propuestos por la sociedad civil para brindar un trato adecuado al informar sobre el fallecimiento de una persona migrante. La MIV considera preocupante que la notificación de los decesos no se hace de forma profesional y con acompañamiento psicológico, lo que ahonda el sufrimiento de las familias. En este sentido, uno de los comités de familiares denunció la falta de apoyo económico que reciben por parte de las instituciones hondureñas en el proceso de repatriación de los restos. El Estado hondureño sólo se hace cargo del coste de traerlos hasta Honduras, una vez ahí son las familias las que deben pagar el resto del trayecto hasta el lugar de origen del migrante.

También hay casos en que los familiares se han quejado y desde Cancillería les ofrecían de manera informal 3,000 lempiras¹²¹ como apoyo, cantidad que tampoco cubre el costo total del trayecto final de la repatriación; lo que fue entendido por los familiares como una ofensa. A ello se une la existencia de casos en los que realmente no se habían repatriado los restos del migrante, sino que dentro del féretro había arena o incluso un maniquí. Por lo que las familias no confían en las instituciones cuando se les entregan cuerpos que no están completos. Los comités también denunciaron la existencia de cobros ilegales por parte de funcionarios de Cancillería que piden hasta unos 300 dólares para la repatriación de migrantes.

Por su parte, los familiares de las víctimas de la masacre de Cadereyta denunciaron que han sido víctimas de maltrato por parte de las autoridades de ambos países y que no recibieron un trato humano, lo que aumentó su dolor. El familiar de uno de los migrantes asesinados declaró que a su hermano le trataron “*como que fuera un perro*”, ya que las autoridades mexicanas revictimizaron a los migrantes masacrados al vincularles con el crimen organizado, por lo que fueron criminalizados. Asimismo, los familiares señalaron que también acudieron a la Cancillería para solicitar ayuda, pero que “*no dieron respuesta y engavetaron su solicitud*” y no les apoyaron en la búsqueda. Sólo fue a través del apoyo del Comité de Familiares de El Progreso (COFAMIPRO), que ayudó con la recogida de muestras de ADN y su envío a México, y la denuncia en México ante la PGR que posteriormente supieron de los desaparecidos en la masacre.

La situación de desamparo y desprotección de los comités de familiares, constatada por la MIV, ha llevado a que sean los mismo comités los que se apoyan entre sí y a las familias, dando acompañamiento legal y psicosocial, ya que durante la búsqueda de los migrantes desaparecidos hay mucho desgaste emocional o psicológico (depresión, ansiedad), físico (agudización de enfermedades), así como económico (viajes y visitas nacionales e internacionales). Por ello los comités exigieron a los gobiernos que se comprometan a soluciones reales y que la investigación de migrantes desaparecidos sea un compromiso serio y real.

La MIV reconoce la inmensa valentía de los comités de familiares desaparecidos quienes han viajado en caravanas a través de la ruta migratoria en búsqueda de sus seres queridos y en búsqueda de justicia.

e. Migrantes repatriados y deportados

Ante la situación de deportación y repatriación de migrantes hondureños, se debe observar desde los instrumentos internacionales sobre las personas refugiadas, desplazadas y apátridas, que en su derecho a la protección internacional, está prohibida la devolución a su país de origen, la expulsión o el rechazo en la frontera, al igual que la privación de la libertad, aún en la ausencia de reconocimiento de la condición jurídica de refugio.

Lo anterior se sustenta en que la población migrante hondureña se ha visto forzada a salir de su país por razones de violencia generalizada, violaciones a los derechos humanos,

¹²¹ Algo menos de 140 dólares.

perturbaciones al orden público, y en casos muy concretos por discriminación y violencia sexual y de género, víctimas o potenciales víctimas de trata, o ser parte de una población con alta vulnerabilidad de niños, niñas, adolescentes, población LGBTTI o grupos étnicos, a quienes aplicaría el principio del interés superior y la no discriminación, como sujetos de derecho y de protección especial. En tal sentido, la devolución o rechazo en las fronteras de la población migrante hondureña, en alta condición de vulnerabilidad, potencialmente en una gran mayoría solicitante y sujeto de derecho de protección internacional, en la categoría de refugiado o por el principio de pro persona humana, constituye una nueva vulneración a sus derechos y eleva los riesgos a su vida e integridad.

Asimismo, lo que está ocurriendo con el Programa Frontera Sur en México, con un significativo aumento de la privación de la libertad y posterior deportación involuntaria de la población migrante forzada de Honduras, no sólo es una política pública distante de una comprensión de "fronteras solidarias" de la Declaración y Plan de Acción de México del 2004, sino que se aleja de un enfoque de derechos humanos en lógica de protección y seguridad humana.

La privación de la libertad a población migrante en condición regular o irregular, es una acción prohibida desde la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990, en su artículo 16, al igual que prohíbe la expulsión colectiva -artículo 22, en consonancia con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que prohíbe la expulsión o devolución ("refoulement") si ésta pone en riesgo la vida o libertad de quien es sujeto de protección internacional, artículos 31, 32 y 33.

La reciente Declaración de Brasil y su Plan de Acción, reiteran que ante los nuevos retos humanitarios y de protección internacional, en particular en el Triángulo Norte de Centroamérica, urge mantener los logros alcanzados en la Declaración de Cartagena de 1984 frente a la protección de refugiados en la región, desde la complementariedad del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados, desplazados y apátridas en América Latina y el Caribe. De esta manera, se reitera la especial atención a los programas "Asilo de Calidad" y "Fronteras solidarias y seguras" y un "Tránsito digno y seguro" ante *"el incremento en los movimientos migratorios mixtos (que) podrían incluir a personas necesitadas de protección internacional"*, al tiempo que la preocupación por el aumento de los grupos y poblaciones en *"situación de vulnerabilidad que también podrían requerir protección internacional"* (niños, niñas, adolescentes víctimas o potenciales víctimas de trata, grupos étnicos, entre otros)¹²².

Por todo lo anterior, es urgente que se suspendan las acciones colectivas de privación de la libertad y deportaciones, principalmente en EEUU y México, por vía aérea y terrestre, porque constituyen un incumplimiento al marco internacional de protección de la población migrante, con o sin un reconocimiento jurídico de su estatus de refugiado y está

¹²² Declaración y Plan de Acción de Brasil.

Ver: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9867>

incrementando el riesgo a la vida e integridad de la población migrante vulnerable que es devuelta a Honduras, sin que existan cambios a las circunstancias y hechos que provocaron su desplazamiento o migración forzada.

CAPÍTULO III-Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- El discurso del gobierno de Honduras gira en torno a una visión del problema del desplazamiento forzado y del hecho migratorio como un asunto de ayuda humanitaria, no hay perspectiva o enfoque de derechos, que mire a las personas migrantes como sujetos de derechos y que institucionalice una política pública integral que aborde el problema como una cuestión estructural. Sólo hay intervenciones que reaccionan ante las coyunturas, como la “crisis de la niñez migrante”, y una visión humanitaria y asistencialista de la problemática. El gobierno admite que solo no puede y que es una cuestión en la que las organizaciones de la sociedad civil se deben implicar. Por ello, hay una ausencia del enfoque de derechos humanos y falta la visión de entender que el Estado tiene la obligación de garantizar la protección.
- La violencia es un elemento central de la realidad hondureña que también acompaña a las y los migrantes hondureños a lo largo de su tránsito migratorio. En el origen actúa como uno de los principales motivos que fuerzan el desplazamiento humano. Los grupos afectados por la violencia incluyen a las niñas, niños y adolescentes hondureños, las mujeres, grupos étnicos, población LGBTTI, defensores/as de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas. A su vez, la violencia persiste en el tránsito migratorio a través de graves violaciones a los derechos humanos cometidas principalmente por grupos del crimen organizado, pero también por actores estatales como policías y agentes de migración. Igualmente, la violencia continúa en el destino y se manifiesta en el retorno a Honduras por la ausencia de políticas de reintegración social.
- En Centroamérica, México y EEUU hay una ausencia de mecanismos efectivos de protección internacional que no se encuentran adaptados a los actuales desafíos y necesidades que presenta la realidad de los migrantes hondureños. Ello se traduce en la dificultad de acceso al sistema de asilo, la ausencia de mecanismos de protección en los países de tránsito, la ausencia de condiciones adecuadas de recepción para solicitantes de asilo y refugiados y la violencia y revictimización a lo largo de la ruta. El derecho a la protección internacional no está garantizado, porque tener una limitada capacidad de respuesta por parte de los Estados y los organismos internacionales se ha vuelto una política. Además, existe la nula voluntad política de los gobiernos de la región para reconocer la violencia como una de las causas del desplazamiento forzado, así como por la falta de recursos financieros y humanos.
- La respuesta de los Estados en la región y en EEUU ante el desplazamiento forzado y la migración son políticas basadas en un enfoque de seguridad que no atiende al respeto de los derechos humanos de las personas migrantes hondureñas. Son políticas que están

llevando a la criminalización de los migrantes y a la aplicación de una política de detención y deportación migratoria sin atender a las necesidades de protección y refugio que tienen las y los migrantes. Una de las más claras expresiones de ello es la militarización de las fronteras y el incremento de los controles en las rutas migratorias. Las supuestas soluciones ofrecidas a través de planes estratégicos como el Programa Frontera Sur o el Plan de la Alianza para la Prosperidad no están enfocadas a brindar soluciones reales a las causas y condiciones de la migración en Honduras en particular y en la región en general.

Recomendaciones

Al gobierno de Honduras

- Dejar de administrar la migración en discursos políticos y atender las causas que provocan la migración forzada.
- Generar condiciones de desarrollo integral que promuevan el derecho a no migrar.
- Para dar respuesta a las causas que generan la migración forzada en Honduras, recomendamos al gobierno que desde lo municipal y nacional se implementen políticas que enfrenten las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que viven importantes sectores de su población, a fin de garantizar la vida digna y el respeto a los derechos humanos. Reconociendo, promoviendo y respetando los derechos ancestrales de las comunidades afro-hondureñas e indígenas.
- Para prevenir el desplazamiento por violencia, el Estado hondureño debe mejorar y ampliar sus estrategias y programas de atención a la niñez, a los jóvenes y otras poblaciones vulnerables. Asimismo, sus estrategias de seguridad deben estar enmarcadas en el respeto a los derechos humanos y deben ser implementadas por instituciones civiles de seguridad.
- El gobierno de Honduras debe establecer, ampliar y mejorar sistemas y mecanismos de atención para las personas desplazadas por violencia, que involucren la creación de casas de refugio y el establecimiento de programas sociales para la reubicación y reinserción en condiciones de dignidad de las personas y familias que se ven obligadas a abandonar sus casas y comunidades.
- Para quienes se ven obligados a desplazarse más allá de sus fronteras, el gobierno de Honduras debe ampliar y fortalecer el trabajo de la red consular en el extranjero, mediante la asignación de recursos financieros acordes a las necesidades de la población migrante; la contratación de más personal y su profesionalización en materia de derechos humanos y atención consular, que les permita brindar una atención oportuna y adecuada que incluya el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes y sus familiares.
- Para la atención de la población migrante hondureña que es retornada al país, el gobierno de Honduras debe abrir lo antes posible un centro de atención a la población migrante retornada en la frontera entre Honduras y Guatemala que garantice la recepción digna. Para las niñas, niños y adolescentes que retornan se debe asegurar una atención integral que trascienda a la recepción y entrega a sus familiares en los centros de recepción.
- El gobierno de Honduras debe fortalecer sus mecanismos de monitoreo, seguimiento y atención para los niños, niñas y adolescentes que han sido deportados, especialmente

para aquellos que están en riesgo de sufrir violencia, los cuales deben aplicarse desde su recepción, integración familiar y reinserción en su lugar de destino.

- Urge que el gobierno de Honduras establezca y amplíe servicios de atención en programas de reintegración social para la población migrante retornada, tales como: acceso a fuentes de empleo, acceso a becas para la niñez y adolescencia, oportunidades de capacitación laboral, acompañamiento y atención psicosocial. Poniendo especial atención a las condiciones de vulnerabilidad, falta de protección e seguridad que puedan enfrentar en sus comunidades aquellos que se vieron obligados a migrar por razones de violencia y que fueron retornados de la ruta migratoria.
- El gobierno de Honduras debe pronunciarse ante los gobiernos de los países de la ruta migratoria en la región en defensa y protección de los derechos humanos de su población, quienes por razones estructurales, de violencia y reunificación familiar han migrado y sus derechos les han sido violentados.
- El Gobierno de Honduras debe reglamentar el Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño, FOSMIH recogido en la Ley de Protección al Hondureño Migrante y destinar recursos que faciliten la articulación, el relacionamiento y el trabajo conjunto de los Comités de Familiares de Migrantes Desaparecidos.
- El Gobierno de Honduras debe implementar la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia a través de un mecanismo de protección a defensores, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia de manera eficaz que cuente con presupuesto, personal, capacidades y con participación plena de los defensores, periodistas y otros sectores cubiertos por la ley.

Al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH)

- Que continúe y fortalezca el trabajo y las acciones conjuntas con los municipios para el seguimiento de la reintegración social y familiar de los niños/as deportados en sus lugares de origen.
- Que en el cumplimiento de su mandato, el presupuesto del CONADEH lo determine la misma institución y haya una autonomía presupuestal y real del Gobierno y suficientes recursos para cumplir su misión.
- Que el CONADEH elabore un protocolo y un mecanismo que oriente, apoye y facilite la generación de pruebas exigidas en terceros países donde se va a solicitar refugio. Que el mecanismo se complemente con algún tipo acompañamiento a los casos por parte del CONADEH una vez las personas que buscan refugio haya salido a otros países.
- Que el CONADEH impulse acuerdos para realizar a nivel regional un trabajo coordinado con otros ombudsmen e instituciones de refugio. Que se establezcan acuerdos a nivel regional para coordinar y unir esfuerzos interinstitucionales en el tratamiento de los casos de refugio.

Al gobierno de los Estados Unidos

- Ampliar el número de reconocimientos de solicitudes de la condición de refugiado, frente a la crisis emergente del pueblo hondureño.
- En el diseño e implementación de sus políticas para la región en materia migratoria, el gobierno de los Estados Unidos debe tener en cuenta las causas estructurales y las situaciones de violencia que están originando la migración forzada en Honduras. Por lo que la cooperación de los EE.UU hacia los países del Triángulo Norte, deben estar dirigidas

a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables y reducir la impunidad, asegurando el respeto a sus derechos humanos.

- La presencia y cooperación de los EE.UU. hacia los países del Triángulo Norte y México debe estar basada en una amplia visión de seguridad humana y no en la militarización de sociedades y fronteras. Para lo cual el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de la región debe implementar mecanismos de protección internacional para toda la población migrante que ha sido vulnerada en sus derechos humanos, con especial énfasis en la niñez y adolescencia.
- El gobierno de los Estados Unidos debe garantizar que los niños, niñas y adolescentes migrantes que se encuentran en un proceso legal migratorio en su país, tengan acceso a un asesoramiento jurídico en su propio idioma que sea eficaz y oportuno, que tenga en cuenta los factores expulsivos que les llevaron a migrar. Garantizando condiciones dignas para las y los migrantes adultos que se encuentran en los centros de detención para migrantes.
- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) además de otras autoridades migratorias debe garantizar que todas las personas migrantes que soliciten asilo sus casos sean debidamente evaluados, a fin de asegurar y proteger su derecho a acceder a la protección internacional. Brindando la debida ayuda humanitaria a las necesidades urgentes y protección de las y los migrantes.
- El Gobierno de los Estados Unidos debe poner fin de inmediato a la detención de familias migrantes.
- El gobierno de los Estados Unidos debe tener la voluntad política de lograr una reforma migratoria justa.

Al gobierno de México

- Ampliar el número de reconocimientos de solicitudes de la condición de refugiado, frente a la crisis emergente del pueblo hondureño.
- Que deje de aplicar el Programa Frontera Sur por ser un plan que contradice el discurso de respeto y protección a los derechos humanos, porque lo único que ha hecho es securitizar la frontera y el país en detrimento de los derechos humanos de las y los migrantes.
- En la detención y traslado de la población migrante hondureña que el gobierno de México está retornando a Honduras, se deben tomar todas las medidas que sean necesarias para asegurar su traslado y repatriación en condiciones dignas y seguras. Asegurando el adecuado cumplimiento del Memorándum de Entendimiento suscrito.
- La MIV recomienda que las mujeres embarazadas y la infancia que está siendo retornada por tierra en viajes de 12 hasta 30 horas, sea retornada al país por la vía aérea, que los autobuses en los cuales regresan las y los migrantes se encuentren en condiciones adecuadas y cuenten con servicios básicos para el recorrido que estarán haciendo.
- El gobierno de México debe implementar políticas públicas dirigidas a prevenir, proteger y sancionar los delitos y las graves violaciones a los derechos humanos que son víctimas la población migrante hondureña y centroamericana en su territorio. Brindando una atención adecuada a las víctimas y sus familiares, reconociendo su derecho a una adecuada reparación del daño causado.
- El gobierno de México debe garantizar la protección a las y los defensores de los derechos humanos de la población migrante. Se deben incluir medidas de protección, además de la

investigación y sanción de amenazas y/o ataques contra defensores/as; el reconocimiento y respeto a la labor que ellos realizan.

- Las autoridades mexicanas de inmigración deben garantizar el debido proceso para las solicitudes de asilo de las personas migrantes. Deben proporcionar información veraz que explique a las y los migrantes que solicitan refugio, que durante el proceso de su solicitud no tienen que estar en centros de detención y pueden hacer este trámite desde las casas del migrante.
- En la búsqueda y localización de la población migrante, el gobierno de México debe garantizar a las organizaciones defensoras de los derechos humanos el acceso a los centros de detención y de recepción de migrantes.

A los gobiernos de los países de región

- Que generen políticas que promuevan el desarrollo y el derecho a no migrar.
- Los gobiernos de los países de la región deben escuchar y atender las demandas de las madres y familiares de las y los migrantes desaparecidos y no localizados en la ruta migratoria. Es urgente y necesario crear e implementar un mecanismo transnacional y regional de búsqueda, localización, retorno y repatriación de las y los migrantes desaparecidos. Este mecanismo transnacional debe ser establecido en cada país y coordinado con los comités de familiares.
- Para avanzar en el establecimiento del mecanismo transnacional de búsqueda de los migrantes desaparecidos, es imperativo que el gobierno de México implemente lo más pronto posible el acuerdo suscrito por la Procuraduría General de la República (PGR) que permite nombrar agregados consulares en Centro América que respondan en los países de origen a las demandas de las familias con migrantes desaparecidos.
- Urge que con el apoyo de los gobiernos de México y Estados Unidos, el gobierno de Honduras garantice una atención amplia e integral para los migrantes que han retornado mutilados y discapacitados en su paso por la ruta migratoria.
- Urge que los gobiernos de la región implementen de forma integral la carta de entendimiento para una repatriación digna, ordenada, ágil y segura de ciudadanos centroamericanos vía terrestre.
- Que los Estados desarrollen políticas alternas a la detención de migrantes, en las cuales se garantice la integridad, la dignidad y se consideren las particularidades específicas que garanticen los derechos humanos teniendo en cuenta que los migrantes detenidos no son criminales sino solicitantes de refugio, desplazados, víctimas de Trata, niños, niñas, jóvenes, hombre, mujeres, familias y personas de la tercera edad quienes se ven forzados a migrar.

A las Naciones Unidas

- Que reconozca la grave situación humanitaria presente en el Triángulo Norte de Centroamérica y solicite a los Estados una acogida basada en el principio de la protección internacional de los derechos humanos.
- Que se instale lo más pronto posible la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras y que incluya dentro de su plan de trabajo anual el desplazamiento y las migraciones forzadas para que documente y monitoree casos paradigmáticos y brinde asistencia técnica a la entidad gubernamental correspondiente.

- Que el ACNUR fortalezca su presencia en Honduras desarrollando los mecanismos de recepción, registro e identificación de casos que requieran de protección internacional; que establezca el desarrollo de capacidades de seguimiento, así como la identificación de alternativas para niñas, niños y adolescentes.
- Que el ACNUR a nivel regional desarrolle un intercambio de experiencias entre sus diferentes oficinas; que fortalezca la coordinación y el trabajo conjunto con ONG`s, así como la incorporación de la dimensión regional y mecanismos para adopción de prioridades regionales, incorporando a México en este proceso.

A las organizaciones de la sociedad civil

- Que las organizaciones de la sociedad civil de Centroamérica, México y EEUU establezcan redes, fortalezcan las que ya tienen y trabajen de manera articulada y conjunta para abordar de forma regional el tema de la migración.
- Que las organizaciones de la sociedad civil en Centroamérica y México, apoyadas por organizaciones de la sociedad civil de EEUU, introduzcan en sus agendas de trabajo una labor de incidencia en EEUU sobre la política del Gobierno estadounidense en temas migratorios y de política exterior en la región.
- Que las organizaciones de la sociedad civil y de cooperación internacional en Honduras se fortalezcan interna y programáticamente para que aborden el tema migratorio de una manera no coyuntural e incorporen el enfoque de protección internacional de la migración en sus programas y planes internos como eje permanente de trabajo.

FUENTES

Informes y documentos

- ACAPS, *Otras Situaciones de Violencia en el Triángulo del Norte Centroamericano*, mayo 2014.
<http://www.acaps.org/img/documents/o-140526-osv-humanitarian-impact-tnca-final.pdf>

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, *Children on the Run*, 2014.
http://observatoriocolef.org/admin/documentos/UAC_UNHCR_Children%20on%20the%20Run_Full%20Report.pdf

- Amnistía Internacional, *Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México*, 2010.
<file:///C:/Users/megan/Downloads/amr410142010es.pdf>

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Derechos Humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México*, diciembre 2013.
<http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/informe-Migrantes-Mexico-2013.pdf>

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, *Observaciones preliminares sobre la situación de los derechos humanos en Honduras*, diciembre 2014.
<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/146A.asp>

- Comisión Multinacional de la Alianza por la Paz y la Justicia.

- Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, *Informe final de Hallazgos y Recomendaciones del Proyecto "Reintegración Migrantes Retornados" y "Recuperación Temprana Tras la Emergencia por Sequía"*, julio 2015.
<http://conadeh.hn/wp-content/uploads/2015/07/INFORME-HALLAZGO-Y-RECOMENDACIONES-CONADEH1.pdf>

- Comité por la Libertad de Expresión-C-Libre, *Informe Libertad de Expresión 2014*.
<https://www.dropbox.com/s/shg7mrb6amjc1lv/informe%20Libertad%20de%20expresi%C3%B3n%202014.pdf?dl=0>

- Conferencia Jesuita de EEUU, *Consideraciones para los Hondureños y Hondureñas en el Proceso de Asilo en EEUU: Legislación Relevante e Información sobre el País de Origen*, 2014.
http://jesuits.org/Assets/Publications/File/Honduras_asilo_reporte_FINAL.pdf

- Declaración de Brasil "Un Marco de Cooperación y Solidaridad Regional para Fortalecer la Protección Internacional de las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe", Plan de Acción de Brasil "Una Hoja de Ruta Común para Fortalecer la Protección y Promover Soluciones Sostenibles para las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe dentro de un Marco de Cooperación y Solidaridad", diciembre 2014.
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9867>

-Declaración y Plan de Acción de México Para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina”, noviembre 2004.

https://www.oas.org/dil/esp/Declaracion_y_Plan_de_Accion_de_Mexico_2004.pdf

-Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, AFL-CIO, *Trade Violence and Migration: The Broken Promises to Honduran Workers*.

<http://www.aflcio.org/content/download/147761/3770791/file/Honduras.PDF>

-Georgetown Law Human Rights Institute, *The Cost of Stemming the Tide*, abril 2015.

<https://www.law.georgetown.edu/news/press-releases/the-cost-of-stemming-the-tide.cfm>

-Hivos, *Los derechos humanos en Centroamérica en el siglo XXI: del Golpe de Estado en Honduras (2009) al juzgamiento de Ríos Montt en Guatemala (2013)*.

<http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33833.pdf>

-Human Rights Watch “*You don’t have rights here*”. *US Border Screening and returns of Central Americans to Risk of Serious Harm*, 2014.

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us1014_web_0.pdf

-Indyra Mendoza, Red Lésbica Cattracha, “Crímenes de Odio por Orientación Sexual e Identidad de Género y su Nexa con la Migración LGBTTI en la Region Centroamericana,” 1 de julio de 2013, y Indyra Mendoza, Red Lésbica Cattrachas, “Discriminación Laboral de las Lesbianas y su Nexa con la Migración,” 2014.

-Latin American Working Group, *Honduras: un gobierno que incumple con proteger a su pueblo*, marzo 2015.

file:///C:/Users/megan/Downloads/Honduras_Spanish_CIPLAWG.pdf

-Latin America Working Group, *Una Coyuntura Desafiante para la Protección de los Derechos de los Migrantes y los Derechos Humanos en el Triángulo Norte de América Central y a lo largo de la ruta de los migrantes*, julio 2015.

http://lawg.org/storage/documents/LAWG_Guia_de_IncidenciaProteccion_de_Derechos_de_Migrantes_y_Derechos_Humanos_FINAL.pdf

-Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte

<http://www.presidencia.gob.hn/crisismigrante/wp-content/uploads/2014/09/Plan-Triangulo-Norte-210914-Version-Final-Imprinta-PDF-2.pdf>

-Naciones Unidas, *Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sobre su misión a México (21 de abril a 2 de mayo de 2014)*. Diciembre de 2014.

http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1425291.pdf

-Observatorio de la violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Boletín Anual No. 36 sobre Mortalidad y Otros, edición de enero a diciembre del 2014.

<http://www.iudpas.org/pdf/Boletines/Nacional/NEd36EneDic2014.pdf>

-Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata de personas*, 2010.

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_sp.pdf

-Organización Mundial de la Salud, *Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia*, 2014.

file:///C:/Users/megan/Downloads/9789241564793_eng.pdf

-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), *Informe sobre Desarrollo Humano*, Honduras 2011.

http://www.hn.undp.org/content/dam/honduras/docs/publicaciones/INDH_2011_completo.pdf

-Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes-REDODEM. *Migrantes invisibles, violencia tangible*, 2014.

<http://www.sjmmexico.org.mx/wp-content/uploads/2015/07/informe-migrantes-2014.pdf>

-University of California Hastings College of the Law y Universidad Nacional de Lanús, *Niñez y migración en Centro y Norte América: causas, políticas, prácticas y desafíos*, febrero 2015.

http://cgrs.uchastings.edu/sites/default/files/Ninez-MigracionDerechosHumanos_Espa%C3%B1ol_1.pdf

-Washington Office on Latin America-WOLA, *La otra frontera de México. Seguridad, migración y la crisis humanitaria en la línea con Centroamérica*, agosto 2014.

<http://www.wola.org/sites/default/files/La%20otra%20frontera.pdf>

Leyes

-Normas nacionales de Honduras

-Decreto Ejecutivo No. PCM-053-2013 de creación de la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia.

<http://faolex.fao.org/docs/pdf/hon132079.pdf>

-Decreto 59-2012, Ley Contra la Trata de Personas.

<http://chfhonduras.org/wp-content/uploads/downloads/2013/08/Ley%20Trata%20de%20Personas%20Honduras%202013.pdf>

-Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), de septiembre de 2013.

<https://cambiogeneracional.files.wordpress.com/2012/08/ley-orgc3a1nica-de-las-zonas-de-empleo-y-desarrollo-econ3b3mico-zede-decreto-no-120-312.pdf>

-Decreto Ejecutivo PCM 33-2014 de Declaración de Emergencia.

<http://www.presidencia.gob.hn/transparencia/wp-content/uploads/2014/04/Decreto-Ejecutivo-PCM-033-2014.pdf>

-Ley de Protección para los/las Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

[http://www.tsc.gob.hn/leyes/Ley Proteccion defensores der humanos periodistas op just.pdf](http://www.tsc.gob.hn/leyes/Ley%20Proteccion%20defensores%20der%20humanos%20periodistas%20op%20just.pdf)

-Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y sus Familiares

<http://www.sre.gob.hn/inicio/2014/marzo/leyes/LEY%20DEL%20MIGRANTE%2020140001.pdf>

Leyes Nacionales de México

- Ley de Migración de México del 25 de mayo de 2011, texto reformado octubre del 2014.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_301014.pdf

-Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, de 27 de enero de 2011, texto reformado octubre 2014.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPCAP_301014.pdf

-Normas internacionales

Sistema Universal

-Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT.

-Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967.

-Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

-Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

-Pacto Internacional de Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

-Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

-Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984.

-Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990.

-Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de 1979.

-Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1966.

-Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y sus Protocolos para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.

-Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional

www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf

Sistema Regional

-Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969.

-Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de 1994.

-Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, de 1985.

-Convención Interamericana sobre tráfico internacional de menores, de 1994.

Acuerdos regionales

-*Memorándum de Entendimiento entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de la República de El Salvador, de la República de Guatemala, de la República de Honduras y de la República de Nicaragua, para la repatriación digna, ordenada, ágil y segura de nacionales centroamericanos migrantes vía terrestre*, del 7 de julio de 2006.

<http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/documentosypub/basededatos/legislacionnacional/acuerdosbilaterales/memorandumrepatriacion.pdf>

Diarios

-La Tribuna

<http://www.latribuna.hn/2015/04/23/42-productos-de-canasta-basica-registran-alzas/>

-El Herald

<http://www.elheraldo.hn/economia/837145-213/honduras-canasta-b%C3%A1sica-sube-a-775529-lempiras>

<http://www.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/AlFrente/story.csp?cid=566375&sid=300&fid=209>

-El Libertador

<http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/321-inicia-proceso-de-seleccion-de-nueva-corte-suprema-de-justicia-en-honduras>

-Mientras tanto en México

<http://www.mientrastantoenmexico.mx/11528/2015/02/12/el-mapa-de-los-carteles-de-la-droga-en-2015/>

-Latina Lista

<http://latinalista.com/2012/09/historic-partnership-agreements-signed>

-Honduprensa

<https://honduprensa.wordpress.com/tag/angel-amilcar-colon-quevedo/>

Páginas web

-Banco Centroamericano de Integración Económica-BCIE

<http://www.bcie.org/uploaded/content/article/1944368211.pdf>

-Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes-CIDEHUM

<http://www.cidehum.org/>

-Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos-CIPRODEH

<http://www.ciprodeh.org.hn/>

<http://www.ciprodeh.org.hn/Noticias/ArtMID/3057/ArticleID/2228/EN-HUELGA-DE-HAMBRE-INDIGNACION-FUERA-CORRUPTOS-JUSTICIA-Y-ASAMBLEA-NACIONAL-CONSTITUYENTE>

-Comisión Mexicana de Ayuda al Refugado, COMAR.

http://www.comar.gob.mx/es/COMAR/Estadisticas_COMAR

-Comité por la Libre Expresión-C-Libre

<http://www.clibrehonduras.com/alerta/militares-y-polic%3%ADas-hondure%3%B1os-agreden-huelguistas-tras-23-d%3%ADas-de-ayuno>

-Federación Internacional de los Derechos Humanos, FIDH

<https://www.fidh.org/es/americas/honduras/no-mas-impunidad-corrupcion-en-honduras-violenta-derecho-a-la-salud>

-Fundación Avina

<http://www.avina.net/esp/13218/incontext-63/>

-Hogar-Refugio para personas migrantes La 72

<http://www.la72.org/?p=585>

-Instituto Nacional de Migración de México, INM

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/OPIS_5_funciones

-Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras

<https://proah.wordpress.com/2015/06/02/la-comunidad-garifuna-de-barra-vieja-a-juicio-por-defender-su-territorio-ancestral/>

-U.S. Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service

<http://apps.fas.usda.gov/GATS/>

-Washington Office on Latin America-WOLA

http://www.wola.org/es/noticias/mexico_ahora_detiene_mas_migrantes_centroamericanos_que_los_estado_unidos